



MAESTRIA EN

Derecho Penal y Derecho Procesal Penal

Preparación y defensa de juicios simulados

Prof. Dr. Alexander Rodríguez Campos
Doctor en Derecho Procesal



UCA tradición Jesuita en Nicaragua

POSTGRADO EN DERECHO PROCESAL PENAL
(Sabatino)

NO.	FECHA	TEMA	PROFESOR
1.	7 de octubre de 2006	La victimología	
2.	14 de octubre de 2006	Preparación y defensa de juicios simulados	
3.	21 de octubre de 2006	Preparación y defensa de juicios simulados	
4.	28 de octubre de 2006	Preparación y defensa de juicios simulados	
5.	11 noviembre de 2006	Nociones generales sobre criminología	

347 00
A-696
C-8

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
IV Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal

Asignatura
Preparación y defensa de juicios simulados

Prof. Dr. Alexander Rodríguez Campos
Doctor en Derecho Procesal

6580
21-06-12
—
FCS
— 2012/10/1808
REC
Folio

Destrezas para el juicio oral

Alexander Rodríguez
Managua, octubre 2006

Apertura

➤ Discurso de apertura

Art. 303

Función

- Ayuda al juez o jurado a comprender los hechos.
- Las partes exponen su teoría del caso.
- El discurso debe ser breve, claro y preciso.
- Se debe identificar y saludar a las partes.

Estructura

- Se inicia con planteamiento del tema
- Enunciación general de la estrategia
- No es conveniente detallar todo
- El acusador debe atribuir un hecho
- La defensa rebatir la participación del acusado o falta de elementos de convicción o identificación errónea
- Sobre la presentación del caso se señalan los interrogatorios y la clausura

Técnicas

- Identificar a las partes por sus nombres. No referirse a ellos como agraviado, ofendido, lesionado.
- El defensor debe evitar referirse a su cliente como el acusado, reo, justiciable, procesado, sea minimizar lo negativo.
- En la apertura no se argumenta, no se analizan pruebas las propias ni las del contrario.
- No hay réplica ni réplica

Ejemplos de apertura

- Acusador
- Defensor

Interrogatorio

➤ Interrogatorio directo

Entrevista

- Idealmente la entrevista debe ser el paso previo a cualquier interrogatorio. Entrevista ppt

PLANIFICACIÓN

"Saber"

- Debo o no ??
- Puntos débiles del testigo.
- Puntos débiles del testimonio.
- Respuestas durante el ?
- Tipo de preguntas que formulará.
- Cuándo y Cómo parar.

Prueba testimonial

- Se inicia con los testigos del acusador, en el orden que este decida de acuerdo con su estrategia.
- El Juez le solicita levantar la mano derecha para la promesa de ley.
- Le hace las advertencias del falso testimonio (Art. 201 CPP)
- Se le pide identificación y se le ubica en la silla de testigos.

10

Prueba testimonial

Interrogatorio de identificación.

Es realizado por el juez que pregunta:

- Nombre, estado civil, oficio, domicilio.
- Si conoce a las partes
- Si tiene interés en el resultado del juicio.

11

INTERROGATORIO DIRECTO. (Art. 307)

- Se explotan los hechos positivos que refuerzan la teoría del caso.
- Debe ubicarse el testigo en los hechos y luego se interroga.
- Las primeras preguntas deben ser abiertas. (Cómo, cuando, dónde, quién y qué).
- Puede el testigo hacer dibujos en pizarra o en hojas, señalar distancias en relación a objetos de la sala de juicio.

12

Interrogatorio directo

- Las preguntas pueden ser incrementales, es decir en orden cronológico (Ej.: luego, después, posteriormente, etc.)
- Esta es la oportunidad para introducir pruebas materiales y documentales (Art. 210, 247, 287 segundo párrafo)
- Si se quiere mostrar al testigo un documento o prueba material (fotos, mapas, diagramas, informes, peritajes, etc.) debe solicitarse al Juez para que lo incorpore al juicio.
- El interrogatorio debe concluir con una pregunta relevante

13

Interrogatorio directo

- Preguntas formuladas por la parte que las ofreció
- Como regla de cortesía conviene saludar y agradecer al testigo propio o ajeno
- Lo interrogará sobre los puntos que le interesa conocer al Juez o Jurado
- No debe inducirlo a decir falsedades, hechos no creíbles o aspectos que favorezcan la tesis contraria.

14

Interrogatorio directo

- Debe de acreditarse al testigo sobre las
- posibilidades de observación que tuvo
 - (porque hizo lo que hizo o cómo pudo
 - haber visto lo que vio).

Se incluyen aspectos de credibilidad, tales como:

- neutralidad, inteligencia, capacidad de observación,
- ocupación, etc..

15

Recomendaciones para realizar un interrogatorio

Organice su interrogatorio:

- Planee a su testigo
- Agrupe su testimonio
- Pregunte sobre el hecho

Utilice un lenguaje sencillo y claro.

NO OLVIDAR PREGUNTAS DIRIGIDAS A:

1. **Demostrar un hecho histórico importante para mantener la acusación / que no se dio tal hecho o que no ocurrió como lo presenta el acusador.**
2. **Que ese hecho corresponde con un tipo penal / o no corresponde.**

16

Interrogatorio

SOBRE LOS HECHOS:

• Testigos directos del hecho

- Ejemplarmente en qué lugar y momento del crimen se dio el hecho por. Continúa de describir condiciones físicas con la descripción.
- Descripción del lugar antes de los hechos o cuando los.
- Descripción general de la acción.
- Date la acción.
- Date la respuesta a los participantes de la acción.
- Date la respuesta a los participantes de la acción.
- Como DERAR QUE UTILIZEN OTROS ASPECTOS PROBATORES

17

El contrainterrogatorio

(Art. 307 Párr. 3º)

18

Utilidad

- Su propósito es obtener elementos de importancia para mi teoría del caso y si es posible evidenciar la inconsistencia de la teoría del caso del oponente.
- Se logra:
 - Desacreditando al testigo.
 - Desacreditando su testimonio.
 - Si es posible, contraponiendo su dicho con otras pruebas.

13

Importancia

- Medio para ejercitar el contradictorio
- Herramienta para llegar a la verdad
- Permite la construcción racional, persuasiva y fiel del alegato
- Sirve para examinar testigos de la contraparte.
- De él depende el éxito o fracaso de su teoría del caso.

22

Planificación

"Saber"

- Debo o no ??
- Puntos débiles del testigo.
- Puntos débiles del testimonio.
- Respuestas durante el ?
- Tipo de preguntas que formulará.
- Cuándo y Cómo parar.

24

Tipos de preguntas

ABIERTAS

Buscan una explicación, amplia del testigo, un relato natural

Se RECOMIENDA EN

- En el interrogatorio
- Testigos directos, presenciales y seguros

Ejemplos

¿Que fue lo que U. observó?

¿Que hizo U.?

¿Que hizo el acusado?

CERRADAS

Buscan obtener una respuesta precisa

Se RECOMIENDA EN

- Mas en el contrainterrogatorio, aunque también se puede usar en el interrogatorio
- Recuerde que estas preguntas **introducen datos** que ya deben estar acreditados

Ejemplos

¿Quiénes estaban presentes?

¿A qué distancia estaba usted del ofendido?

22

Contrainterrogatorio

- Puede la contraparte examinar al testigo del adversario.
- Sirve para señalar debilidades del testigo o su versión (Credibilidad, motivo para mentir, interés en la causa, familiaridad, falta de seguridad, etc..)
- No debe hacersele muchas preguntas y éstas deben ser cerradas (Quien pregunta lo que no sabe , escucha lo lo que quiere).

23

Contrainterrogatorio

- Si no sabe lo que quiere obtener con la pregunta, mejor no formularla.
- No repita preguntas. Da oportunidad al testigo de aclarar a favor de quien lo propuso
- No discuta con el testigo. Es improcedente y denota falta de control del abogado.

24

Pregúntese:

Debo contrainterrogar ??

- Perjudica ese testigo mi teoría del caso ?
- Es importante el testigo?
- Fue creíble?
- Dijo menos de lo esperado?
- Que riesgos necesito tomar? Minimice.
- Cuántos y cuáles son los puntos esenciales para mi teoría del caso?

Evalué propósitos del contrainterrogatorio

1. Cuestionar credibilidad.

➤ Condiciones personales

Quién es?

Qué interés tiene?

Vínculos

Motivos para mentir

➤ Consistencia – Solidez

Intrínseca : Inverosímil- Capacidad

Extrínseca: Dichos anteriores

Otros medios de prueba

*Método de la
confrontación*

Evalué propósitos del contrainterrogatorio

2. Lograr del testigo aspectos positivos para nuestro caso.
3. Sacar a relucir lo que el testigo no dijo
4. Resaltar aspectos negativos del caso de la contraparte.

Límites del contrainterrogatorio

1. En cuanto al objeto de la pregunta:

Busco: Cuestionar el crédito
 Confrontarlo
 Impugnarlo

2. Contenido de la pregunta:

Sugestivas, cerradas, asertivas y de control.

MÉTODO DE CONFRONTACIÓN

- Comprométalo con la versión actual.
- Acredite credibilidad de la versión inicial.
- Establezca la importancia de la inconsistencia.
- Confróntelo.

REGLAS

- CONSIDERE POSIBILIDAD DE NO CONTRAINTERROGAR.
- PIENSE PRIMERO EN EXPLOTAR EL TESTIGO.
- PREGUNTAS FUERTES AL INICIO Y FINAL.
- VARIE EL ORDEN DE LOS ASUNTOS

REGLAS

- NO HAGA PREGUNTA SI NO CREE SABER RESPUESTA.
- DURO CON EL TEMA SUAVE CON EL TESTIGO
- NO ARGUMENTE CON EL TESTIGO.
- NO SOLICITE AL TESTIGO EXPLICAC.
- NO HAGA LA ÚLTIMA PREGUNTA.

31

Caso hipotético

- Pedro es acusado por el delito de corrupción, art. 201 CP en perjuicio de María de 12 años. María vive en un barrio marginal de la ciudad, tiene 4 hermanos. La menor dice que fue llevada por Pedro a la parte posterior del establecimiento donde se desnudaba y la desnudaba, besándola por todo su cuerpo y obligándola a hacerle lo mismo a él. Que esto ocurrió en dos ocasiones dentro del local cuando iba a comprar pan para el desayuno, luego ocurrieron dos veces más donde la llevo a un hotel, ocasiones donde la recogía en su carro a la salida de la escuela. Producto de lo anterior su rendimiento académico bajo y está deprimida.

32

Caso hipotético

- CASO DE LA PSICOLOGA
- Que obtuvo su especialidad en la Universidad de Florida en 1986, que siempre ha trabajado con menores.
- Indica que atendió en 4 ocasiones a María quien le relató los hechos.
- Que visitó a la madre de María quien estaba muy preocupada por los hechos supuestamente ocurridos.

33

Caso hipotético

➤ PARA UN CONTRAINTERROGATORIO

- 1. ¿Desde qué fecha exactamente trabaja con menores?
- 2. ¿Desde cuándo trabaja en la escuela en cuestión?
- 3. En cuanto a las sesiones de atención:
 - ¿Qué tipo de sesiones eran? Individuales o grupales?
 - ¿Cuánto tiempo duraban las sesiones individuales?
 - ¿Aplicó algún tipo de instrumento de evaluación?
- 4. ¿Conoció a todo el círculo familiar de María?
- 5. ¿Visitó su casa?
- 6. ¿Conoció el rendimiento académico de María antes de la denuncia?
- 7. ¿Qué factores en general pueden afectar el rendimiento académico?
- 8. ¿Verificó usted si en el hogar de María existía o existió antes de esta denuncia alguna problemática traumática?

34

Interrogatorio

➤ Interrogatorio redirecto

35

Art. 307, párrafo 3

- La parte proponente puede interrogar por segunda vez a su testigo.
- Es para rehabilitar al testigo o el testimonio.
- Se interrogará sobre hechos nuevos surgidos del contra interrogatorio

36

Interrogatorio

➤ Técnicas prohibidas de interrogatorio

(Art. 307, Párr. 2º)

3º

Fundamento de prohibición

- Son técnicas prohibidas de interrogatorio porque inducen al testigo a decir algo que, si se le hubiera preguntado correctamente, no hubiera dicho. Estas preguntas lesionan la lealtad procesal, irrespetan la dignidad del testigo o perito y pueden alterar la verdad.

3º

Preguntas sugestivas

- El interrogador formula la pregunta que contiene la respuesta deseada.
- Se trata de preguntas aparentes, porque son afirmaciones con una frase previa o posterior para convertirlas en preguntas.
- El que dice las cosas es el abogado y no el testigo
- Solo permiten al testigo afirmar o negar lo que dice el abogado.

EJ: ¿Este tipo de lesión es compatible con un desatornillador?

3º

Preguntas capciosas

Son aquellas que engañan al testigo. Asume cosas que no ha dicho.

Ejemplos:

- ¿Ya dejó de pegarle a su esposa?)
- ¿Qué hizo usted después de ocultar el arma?

Preguntas de coacción

Son aquellas que requieren del testigo respuestas perentorias sin darle oportunidad de reflexionar sobre el relato. (Ej.. Conteste rápido. Recuerde que está bajo juramento, etc.)

Otras preguntas indebidas

➤ Reiterativas

- Insisten sobre un tema que fue ampliamente desarrollado por el testigo.

➤ Impertinentes

- No tienen relación con los hechos de interés o el testigo no tiene capacidad para declarar sobre ellos.

➤ Argumentativas

- Asumen una conclusión como antecedente para formular la pregunta.

¿A qué dan lugar las preguntas prohibidas?

A las objeciones.
Art. 313 CPP

Concepto

Manifestación de voluntad, mediante la cual el abogado se opone a un procedimiento o pregunta irregular y requiere del Juez enmendar el defecto

Utilidad

- Se utilizan para desconcentrar a la contraparte.
- Si el Juez requiere que indique a dónde quiere llegar, evidencia su estrategia.
- Se utiliza para interrumpir cuando se contra interroga al testigo propio y darle oportunidad de pensar la respuesta.

Utilidad

- Principalmente para evitar las preguntas prohibidas (Sugestivas, capciosas o de coacción).
- Para objetar las decisiones que el Juez adopte en cuanto a ellas.
- Hay que tener prudencia al usarlas. Son armas de doble filo, que pueden comprometer la credibilidad del interrogador.

Tipos

Objeciones formales:

- Tienen como efecto la reformulación.
- Ej: capciosas, sugestivas, especulativas, argumentativas, repetitivas y compuestas

Tipos

Sustantivas o de fondo:

- Excluyen totalmente la información
- Prohíben que se interroge sobre materia privilegiada afectada por secreto profesional.
- Prohíben que se interroge sobre aspectos que no constan en lo personal al testigo (Testigo de referencia)
- Cuando son impertinentes (No se refieren al tema a probar)
- Hay que distinguir las preguntas impertinentes con las que se refieren a penféricos.

Procedimiento práctico

- El interesado debe interrumpir de manera firme y vigorosa.
- Interrumpe al contrario y siempre antes de que el testigo conteste.
- Debe señalarle al Juez, porqué la pregunta es sugestiva, capciosa, etc..

40

Procedimiento

- No debe repetir la pregunta ni lo que ha dicho el testigo. (Ej.: "Objeción". Señor Juez, la pregunta es reiterativa, el testigo ya contestó).
- Si el Juez considera fundada la objeción, la declara con lugar y le informa al interrogador que reformule la pregunta, si es que procede.

50

Procedimiento

- No se aconseja concluir el interrogatorio después de que se ha declarado con lugar una objeción.
- Si acoge la protesta y es con jurado, debe indicar el Juez al Jurado que no tome nota de la pregunta o respuesta dada.
- Cuando no se pueda grabar el juicio, los abogados podrán pedirle al Juez que deje constancia en el acta o registro acerca de su inconformidad y su interés en impugnar lo resuelto.

60

Debate final

Alegatos de clausura

Art. 314 CPP

Clausura

Es la etapa más interesante del proceso penal y donde las partes litigantes tienen la última oportunidad de dirigirse y expresarse ante el Juzgador e intentar persuadirlo, sea éste Juez o Jurado, que la parte que representa tiene la razón.

Clausura

- Se inicia con saludo a los presentes.
- Se retoma la Teoría del caso enunciada en la apertura. Demuestra orden y consistencia.
- Se hace repaso de los hechos.
- Se describe y valora la prueba recibida en juicio.

Clausura

- Se argumenta porqué debe creérsele o no a los testigos.
- Debe demostrarse que solo hay una conclusión lógica.
- Es útil usar razonamientos basados en la vida cotidiana, siempre que sean cortos y se logren enlazar con los hechos.

85

Estructura

- Se procede a exponer la Teoría del delito aplicable al caso concreto (Principalmente si es con Juez Técnico).
- Solo es casos excepcionales cuando se discute un tema jurídico, se harán citas cortas de autores, doctrina o jurisprudencia. No es conveniente saturar las conclusiones con citas bibliográficas.
- Si fuere del caso, se deberá escoger de la bibliografía disponible la mejor para el caso concreto.

86

Clausura

- Siempre se cierra el discurso con una pretensión clara.
- Evite leer memoriales, repetir el contenido literal de un testimonio y las opiniones personales.
- Procede la réplica y dúplica y la última palabra al acusado.

87

Principios del discurso de clausura

Captar atención del juzgador

- Que la atención esté centrada en su exposición, para persuadirlo que tome la decisión a su favor.
- No se repiten los testimonios vertidos.
- Utilizar al máximo las pruebas materiales y mostrarlas al Juzgador.

Persuasión y sinceridad

- Explicar las consecuencias que conllevaría el no resolver el caso como se solicita, no solo para el caso concreto, si no para la justicia del país.
- No se debe ser ambivalente ni repetitivo.
- Su exposición no debe parecer memorizada.
- Debe ser espontánea

Convencimiento y vehemencia

- Demostrar confianza y estar convencido de la tesis que expone, sin expresarlo.
- Se debe ser vehemente, pero serio y con respeto.

61

Lenguaje apropiado

- Utilizar lenguaje común y sencillo.
- Evitar los insultos o improperios contra la parte adversa o contra las personas que representa

62

Organización

- El discurso debe ser expuesto en forma organizada.
- Debe anotar en una hoja los temas que van a cubrir su exposición, para no tener que buscarlos dentro del expediente.
- Primero exponga sus argumentos sólidos, antes de referirse a debilidades del contrario.

63

Duración del alegato

- La ley no regula la duración del mismo.
- Va depender del tipo de delito y la prueba presentada.
- Saber terminar en el momento oportuno

24

LA ORALIDAD

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
13	<p>Principio de oralidad. Bajo sanción de nulidad, las diferentes comparecencias, audiencias y los juicios penales previstos por este Código serán orales y públicos. La publicidad podrá ser limitada por las causas previstas en la Constitución Política y las leyes.</p> <p>La práctica de la prueba y los alegatos de la acusación y la defensa se producirán ante el juez o jurado competente que ha de dictar la sentencia o veredicto, sin perjuicio de lo dispuesto respecto a la prueba anticipada.</p> <p>El Juicio tendrá lugar de manera concentrada y continua, en presencia del juez, el jurado, en su caso, y las partes.</p>
26	<p>Competencia. Audiencia especial. Cuando sea solicitada la acumulación de causas por tratarse de delitos conexos, luego de mandar a oír a la otra parte en el plazo de tres días, el juez, dentro de los cinco días siguientes, convocará a audiencia oral especial en la que, luego de escuchar los alegatos de una y otra parte, y de practicarse la prueba ofrecida si fuera pertinente, resolverá declarando con o sin lugar la solicitud de acumulación.</p>
36 pfo. 1)	<p>De la inhibición y recusación. Trámite de la recusación. El juez recusado contestará los cargos en un plazo de tres días en un informe que acompañará al escrito de recusación. Recibidos el escrito de recusación y el informe del juez en la sede del órgano competente, el incidente se deberá resolver en un plazo de cinco días. Si se han ofrecido pruebas personales, este plazo se ampliará a diez días, dentro del cual se convocará a una audiencia previa para la práctica de la prueba.</p>
61 pfo. 3 y 4)	<p>Manifestaciones. Acuerdo. De lograrse acuerdo, éste será sometido a la consideración del juez competente para su aprobación o rechazo. En este caso el juez se asegurará de que la aceptación de los hechos por el acusado sea voluntaria y veraz, y le informará que ella implica el abandono de su derecho a un juicio oral y público.</p> <p>Antes de aprobar el acuerdo, el juez se asegurará de que la víctima ha sido notificada y le brindará la oportunidad para que opine al respecto. Si el juez lo aprueba, dictará sentencia inmediatamente bajo los términos acordados.</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
67	Suspensión condicional de la persecución penal. Revocación. Si el acusado incumple en forma injustificada las condiciones que se le impusieron o comete nuevo delito, el juez, luego de oír al Ministerio Público y al acusado, decidirá acerca de la revocación de la suspensión del proceso. En el primer caso, en vez de revocarla, el juez puede ampliar el plazo de prueba por un año más. Si el Juez decide revocar el auto de suspensión del proceso, convocará a nueva audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
70	De las excepciones. Trámite. Al tener conocimiento de algún motivo que pueda fundar una excepción, la defensa lo planteará al juez solicitándole convocar dentro del plazo máximo de cinco días a audiencia pública para su conocimiento y resolución, ofreciendo la prueba de los hechos que la fundamenten, so pena de inadmisibilidad. De la convocatoria a la audiencia y del contenido de la solicitud se deberá notificar al Ministerio Público y demás partes interesadas.
84	Del ejercicio de la acción civil. Audiencia. El día y hora señalados, el juez realizará la audiencia, iniciando con la celebración de un trámite de conciliación. De lograrse acuerdo su contenido se incorporará en la resolución definitiva. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oír el fundamento de sus pretensiones. . .
97 pfo.2)	Del imputado y el acusado. Capacidad del acusado. . . El estado sobreviniente de alteración psíquica, de perturbación o alteración de la percepción del acusado, que impida su participación en el proceso provocará su suspensión hasta que desaparezca esa incapacidad. Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho ni la continuación del proceso respecto de otros acusados. La incapacidad sólo podrá ser declarada con fundamento en dictamen de médico forense rendido en audiencia pública ante el juez, con participación de las partes y, de ser el caso, se decretará la medida cautelar que corresponda.
132	Del control de la duración del proceso. Audiencias orales. Los jueces y tribunales celebrarán las audiencias orales sin dilación y fijarán el tiempo absolutamente indispensable para realizarlas.
153	Resoluciones jurisdiccionales. Fundamentación. Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como del valor otorgado a los medios de pruebas. En la sentencia se deberá consignar una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba oral, antes de proceder a su valoración. La simple relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará, en ningún supuesto, la fundamentación . . .
164 pfo. 3)	Actividad procesal defectuosa. Incidente de nulidad. . . Fuera de audiencia, la solicitud de nulidad de un acto procesal se deberá plantear por escrito, solicitando la convocatoria de audiencia pública para resolverla.

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
247	<p>Forma de llevar al Juicio los resultados de los actos de investigación. La información de interés para la resolución de la causa, que conste en actas u otros documentos redactados para guardar memoria de los actos de investigación, se incorporará al Juicio a través de la declaración testimonial de quienes directamente la obtuvieron mediante percepción personal.</p> <p>Los expertos no oficiales que hayan intervenido en los actos de investigación adquirirán la condición de peritos si son declarados idóneos como tales por el juez.</p>
255	<p>Audiencia preliminar. Finalidad. La finalidad de la Audiencia Preliminar es hacer del conocimiento del detenido la acusación, resolver sobre la aplicación de medidas cautelares y garantizar su derecho a la defensa.</p>
264	<p>Fijación de Audiencia Inicial. Si el juez ordena la prisión preventiva del acusado, procederá a fijar una fecha inferior a los diez días siguientes para la realización de la Audiencia Inicial.</p>
265	<p>De la Audiencia Inicial. Finalidad. La finalidad de la Audiencia Inicial es determinar si existe causa para proceder a Juicio, iniciar el procedimiento para el intercambio de información sobre pruebas, revisar las medidas cautelares que se hayan aplicado y determinar los actos procesales que tomarán lugar de previo al Juicio. Cuando no se haya realizado Audiencia Preliminar, serán propósitos adicionales de la Audiencia Inicial la revisión de la acusación y la garantía del derecho a la defensa.</p> <p>El acusado, su defensor y el Ministerio Público deberán estar presentes durante esta audiencia. Las otras partes pueden estar presentes y se les notificará previamente acerca de la fecha y sitio de la audiencia . . .</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
<p>271 pfo.2)</p>	<p>De la Audiencia Inicial. Admisión de hechos.</p> <p>Si el acusado espontáneamente admite los hechos de la acusación, el juez se asegurará de que la declaración sea voluntaria y veraz. También le informará que su declaración implica el abandono de su derecho a un Juicio oral y público.</p> <p>Si lo estima necesario, ordenará la recepción de prueba en una audiencia que deberá celebrarse en un plazo no mayor de cinco días . . . Si la prueba recibida arroja dudas sobre la culpabilidad del acusado, rechazará la declaración de culpabilidad y ordenará la continuación del proceso. De lo contrario, señalará fecha y hora, dentro de los siguientes quince días durante los cuales ambas partes podrán presentar pruebas y alegatos acerca de la sentencia por imponer, la cual será impuesta al final de este plazo.</p>
<p>279</p>	<p>Audiencia Preparatoria del Juicio.</p> <p>A solicitud de cualquiera de las partes, se celebrará Audiencia Preparatoria del Juicio, dentro de los cinco días anteriores a la celebración del Juicio oral y público, para resolver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuestiones relacionadas con las controversias surgidas en relación con el intercambio de la información sobre los elementos de prueba; 2. La solicitud de exclusión de alguna prueba ofrecida; 3. Precisar si hay acuerdo sobre hechos que no requieran ser probados en Juicio, y, 4. Ultimar detalles sobre organización del Juicio
<p>281</p>	<p>Del Juicio oral y público. Principios.</p> <p>El Juicio se realizará sobre la base de la acusación, en forma oral, pública, contradictoria y concentrada.</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
287	<p>Del Juicio oral y público. Oralidad. La audiencia pública se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participen en ella. Durante el Juicio, las resoluciones serán fundadas y dictadas verbalmente en forma clara y audible por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, dejándose constancia en el acta del Juicio.</p> <p>El principio de oralidad no excluye la posibilidad que durante el Juicio puedan ser incorporados para su lectura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las pruebas que se hayan recibido mediante la diligencia de anticipo jurisdiccional de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito, cuando sea posible; 2. La prueba documental, informes y certificaciones, y, 3. Las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el Juicio fuera de la sala de audiencias.
296	<p>De la intervención de jurado. Entrevista a candidatos y recusación. Al iniciar el Juicio oral, los acusadores y defensores podrán realizar a cada uno de los candidatos a miembro de jurado, las preguntas que consideren conveniente.</p> <p>El juez controlará su pertinencia . . .</p>
303	<p>Del desarrollo del Juicio. Apertura.</p> <p>En el día y hora fijados, el juez se constituirá en el lugar señalado para el Juicio, verificará la presencia e identidad de las partes, sus defensores y, si es el caso, de los miembros del jurado.</p> <p>Luego de tomar la promesa de ley a los miembros del jurado, declarará abierto el Juicio y ordenará al secretario dar lectura al escrito de acusación formulado por el Ministerio Público y por el acusador particular si lo hubiera. Seguidamente el juez explicará al acusado y al público la importancia y significado del acto, advertirá a las partes que en ningún momento se deberá hacer mención de la posible pena que se pueda imponer al acusado y, si procede, informará al jurado acerca de los hechos en los que las partes están de acuerdo y en consecuencia no requerirán ser probados durante el Juicio.</p> <p>A continuación se procederá, en forma sucinta, a la exposición en el orden de las acusaciones por el fiscal y el acusador particular, si hay, y seguidamente a la exposición por el defensor de los lineamientos de su defensa.</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
307	<p>Desarrollo del juicio. Testigos.</p> <p>Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el Juicio. No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero el juez o el jurado, según el caso, apreciará esta circunstancia al valorar la prueba.</p> <p>El juez moderará el interrogatorio y, a petición de parte o excepcionalmente de oficio, evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes; procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas.</p> <p>Después de que el juez tome la promesa de ley al testigo, la parte que lo propone lo interrogará directamente. A continuación la contraparte podrá formular repreguntas al testigo y, terminadas éstas, la parte que lo propuso podrá nuevamente formularle preguntas limitándose, en esta oportunidad, a la aclaración de elementos nuevos que hayan surgido en el contrainterrogatorio realizado por la contraparte.</p> <p>Después de su declaración, se informará al testigo que queda a disposición del tribunal hasta la finalización del Juicio, que puede permanecer en la sala o retirarse y de ser necesario podrá ser llamado a comparecer nuevamente a declarar cuando así lo requiera cualquiera de las partes. Estas podrán solicitar que un testigo amplíe su declaración cuando surjan elementos o circunstancias nuevos o contradictorios con posterioridad a su declaración.</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
322	<p>Del veredicto, el fallo y la sentencia. Debate sobre la pena. Conocido el fallo o veredicto de culpabilidad, el juez procederá a calificar el hecho y, en la misma audiencia o en audiencia convocada para el día inmediato siguiente, concederá sucesivamente el uso de la palabra al fiscal, al acusador particular si lo hubiere y al defensor para que debatan sobre la pena o medida de seguridad por imponer. Seguidamente ofrecerá la palabra al condenado por si desea hacer alguna manifestación. El juez podrá limitar razonable y equitativamente el tiempo de las intervenciones. En este trámite se aceptará la práctica de la prueba pertinente.</p>
327	<p>Del juicio por faltas. Audiencia inicial y mediación. Admitida la acusación, el juez citará a las partes a la Audiencia Inicial. En el momento de recibir la acusación, el juez interrogará a las partes sobre la previa celebración de trámite de mediación y lo promoverá, si procede, en la forma prevista en el presente Código.</p>
331	<p>Del juicio por faltas. Juicio. Las partes comparecerán a la audiencia con todos los medios probatorios que pretendan hacer valer.</p> <p>El juez oír brevemente a los comparecientes, apreciará conforme el criterio racional los elementos de convicción presentados y absolverá o condenará en el acto expresando claramente sus fundamentos. La sentencia se hará constar en el acta del Juicio.</p> <p>Si no se incorporan medios de prueba durante el Juicio, el juez decidirá sobre la base de los elementos acompañados con la acusación.</p>
342	<p>De la revisión de sentencia. Audiencia. Admitida la revisión, la Sala Penal del Tribunal de Apelación o de la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, dará audiencia dentro de los diez días siguientes al Ministerio Público y a las partes que hayan intervenido en el proceso principal para que comparezcan con los medios de prueba que funden la acción o se opongan a ella. La diligencia se celebrará con la participación de los intervinientes que se presenten, quienes expondrán oralmente sus pretensiones.</p> <p>Son aplicables en lo que corresponda las disposiciones sobre audiencia oral en el Juicio por Delitos. (negrita no es del original)</p>
363	<p>De los recursos. Disposiciones generales. Interposición. Para ser admisibles, los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión. Si se desea solicitar vista oral se deberá manifestar en esta oportunidad . . .</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
370	<p>De los recursos. Disposiciones generales. Renuncia a vista oral. En los recursos de apelación y casación, una vez recibidos los autos en la sede del tribunal de alzada y habiendo éste proveído la radicación de los autos ante sí, no se requerirá convocar a audiencia oral cuando no lo haya solicitado ninguna de las partes o cuando no deba recibirse prueba oral, quedando el recurso en estos casos en estado de fallo.</p>
374	<p>Del Recurso de Reposición. Trámite. Salvo en las audiencias orales, en que se deberá plantear en el acto, este recurso se presentará mediante escrito fundado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la resolución impugnada.</p> <p>Admitido el recurso, el juez convocará a audiencia pública en un plazo no mayor de tres días, con el propósito de oír a las partes y resolver.</p> <p>Cuando el recurso se interponga durante una audiencia oral, el tribunal oírán en el acto a la parte contraria y resolverá de inmediato. La decisión que recaiga se ejecutará en el acto.</p>
383	<p>Del recurso de apelación. Emplazamiento y audiencia. Recibidos los autos, si fuera procedente, el tribunal competente convocará, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la recepción, a audiencia oral para que las partes comparezcan y fundamenten su recurso y su contestación mediante la expresión de los argumentos que consideren oportunos.</p> <p>La vista se desarrollará en lo no previsto expresamente en este capítulo, de acuerdo con las normas del Juicio por Delitos sin jurado que resulten de aplicación.</p>
396	<p>Del recurso de casación. Audiencia oral. Si al interponer el recurso o al contestarlo, alguna de las partes ha solicitado la celebración de audiencia oral o deba recibirse prueba oral para la demostración del vicio señalado en el recurso, la Sala fijará fecha para su realización dentro de los quince días siguientes a la recepción del recurso a trámite.</p> <p>La audiencia se celebrará en el día y hora fijados, con asistencia de los miembros de la Sala y de las partes que concurran. La palabra será concedida primero al abogado del recurrente y luego a las demás partes. Si es necesaria, la prueba se practicará de la forma dispuesta en este Código. . .</p>
404 pfo.3)	<p>De la ejecución penal. Incidentes de ejecución. Los incidentes relativos a la libertad anticipada y aquellos en los cuales, por su importancia, el Juez de Ejecución de la pena lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral citando a los testigos y peritos que deben informar durante el debate.</p>

Arch. Word.Mis doc.Manuel.La oralidad.

LA ORALIDAD

EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE NICARAGUA

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
13	<p>Principio de oralidad. Bajo sanción de nulidad, las diferentes comparecencias, audiencias y los juicios penales previstos por este Código serán orales y públicos. La publicidad podrá ser limitada por las causas previstas en la Constitución Política y las leyes.</p> <p>La práctica de la prueba y los alegatos de la acusación y la defensa se producirán ante el juez o jurado competente que ha de dictar la sentencia o veredicto, sin perjuicio de lo dispuesto respecto a la prueba anticipada.</p> <p>El Juicio tendrá lugar de manera concentrada y continua, en presencia del juez, el jurado, en su caso, y las partes.</p>
26	<p>Competencia. Audiencia especial. Cuando sea solicitada la acumulación de causas por tratarse de delitos conexos, luego de mandar a oír a la otra parte en el plazo de tres días, el juez, dentro de los cinco días siguientes, convocará a audiencia oral especial en la que, luego de escuchar los alegatos de una y otra parte, y de practicarse la prueba ofrecida si fuera pertinente, resolverá declarando con o sin lugar la solicitud de acumulación.</p>
36 pfo. 1)	<p>De la inhibición y recusación. Trámite de la recusación. El juez recusado contestará los cargos en un plazo de tres días en un informe que acompañará al escrito de recusación. Recibidos el escrito de recusación y el informe del juez en la sede del órgano competente, el incidente se deberá resolver en un plazo de cinco días. Si se han ofrecido pruebas personales, este plazo se ampliará a diez días, dentro del cual se convocará a una audiencia previa para la práctica de la prueba.</p>
61 pfo. 3 y 4)	<p>Manifestaciones. Acuerdo. De lograrse acuerdo, éste será sometido a la consideración del juez competente para su aprobación o rechazo. En este caso el juez se asegurará de que la aceptación de los hechos por el acusado sea voluntaria y veraz, y le informará que ella implica el abandono de su derecho a un juicio oral y público.</p> <p>Antes de aprobar el acuerdo, el juez se asegurará de que la víctima ha sido notificada y le brindará la oportunidad para que opine al respecto. Si el juez lo aprueba, dictará sentencia inmediatamente bajo los términos acordados.</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
67	Suspensión condicional de la persecución penal. Revocación. Si el acusado incumple en forma injustificada las condiciones que se le impusieron o comete nuevo delito, el juez, luego de oír al Ministerio Público y al acusado, decidirá acerca de la revocación de la suspensión del proceso. En el primer caso, en vez de revocarla, el juez puede ampliar el plazo de prueba por un año más. Si el Juez decide revocar el auto de suspensión del proceso, convocará a nueva audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
70	De las excepciones. Trámite. Al tener conocimiento de algún motivo que pueda fundar una excepción, la defensa lo planteará al juez solicitándole convocar dentro del plazo máximo de cinco días a audiencia pública para su conocimiento y resolución, ofreciendo la prueba de los hechos que la fundamenten, so pena de inadmisibilidad. De la convocatoria a la audiencia y del contenido de la solicitud se deberá notificar al Ministerio Público y demás partes interesadas.
84	Del ejercicio de la acción civil. Audiencia. El día y hora señalados, el juez realizará la audiencia, iniciando con la celebración de un trámite de conciliación. De lograrse acuerdo su contenido se incorporará en la resolución definitiva. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oír el fundamento de sus pretensiones. . .
97 pfo.2)	Del imputado y el acusado. Capacidad del acusado. . . El estado sobreviniente de alteración psíquica, de perturbación o alteración de la percepción del acusado, que impida su participación en el proceso provocará su suspensión hasta que desaparezca esa incapacidad. Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho ni la continuación del proceso respecto de otros acusados. La incapacidad sólo podrá ser declarada con fundamento en dictamen de médico forense rendido en audiencia pública ante el juez, con participación de las partes y, de ser el caso, se decretará la medida cautelar que corresponda.
132	Del control de la duración del proceso. Audiencias orales. Los jueces y tribunales celebrarán las audiencias orales sin dilación y fijarán el tiempo absolutamente indispensable para realizarlas.
153	Resoluciones jurisdiccionales. Fundamentación. Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como del valor otorgado a los medios de pruebas. En la sentencia se deberá consignar una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba oral, antes de proceder a su valoración. La simple relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará, en ningún supuesto, la fundamentación.
164 pfo. 3)	Actividad procesal defectuosa. Incidente de nulidad. . . Fuera de audiencia, la solicitud de nulidad de un acto procesal se deberá plantear por escrito, solicitando la convocatoria de audiencia pública para resolverla.

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
247	<p>Forma de llevar al Juicio los resultados de los actos de investigación. La información de interés para la resolución de la causa, que conste en actas u otros documentos redactados para guardar memoria de los actos de investigación, se incorporará al Juicio a través de la declaración testimonial de quienes directamente la obtuvieron mediante percepción personal.</p> <p>Los expertos no oficiales que hayan intervenido en los actos de investigación adquirirán la condición de peritos si son declarados idóneos como tales por el juez.</p>
255	<p>Audiencia preliminar. Finalidad. La finalidad de la Audiencia Preliminar es hacer del conocimiento del detenido la acusación, resolver sobre la aplicación de medidas cautelares y garantizar su derecho a la defensa.</p>
264	<p>Fijación de Audiencia Inicial. Si el juez ordena la prisión preventiva del acusado, procederá a fijar una fecha inferior a los diez días siguientes para la realización de la Audiencia Inicial.</p>
265	<p>De la Audiencia Inicial. Finalidad. La finalidad de la Audiencia Inicial es determinar si existe causa para proceder a Juicio, iniciar el procedimiento para el intercambio de información sobre pruebas, revisar las medidas cautelares que se hayan aplicado y determinar los actos procesales que tomarán lugar de previo al Juicio. Cuando no se haya realizado Audiencia Preliminar, serán propósitos adicionales de la Audiencia Inicial la revisión de la acusación y la garantía del derecho a la defensa.</p> <p>El acusado, su defensor y el Ministerio Público deberán estar presentes durante esta audiencia. Las otras partes pueden estar presentes y se les notificará previamente acerca de la fecha y sitio de la audiencia . . .</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
<p>271 pfo.2)</p>	<p>De la Audiencia Inicial. Admisión de hechos.</p> <p>Si el acusado espontáneamente admite los hechos de la acusación, el juez se asegurará de que la declaración sea voluntaria y veraz. También le informará que su declaración implica el abandono de su derecho a un Juicio oral y público.</p> <p>Si lo estima necesario, ordenará la recepción de prueba en una audiencia que deberá celebrarse en un plazo no mayor de cinco días . . . Si la prueba recibida arroja dudas sobre la culpabilidad del acusado, rechazará la declaración de culpabilidad y ordenará la continuación del proceso. De lo contrario, señalará fecha y hora, dentro de los siguientes quince días durante los cuales ambas partes podrán presentar pruebas y alegatos acerca de la sentencia por imponer, la cual será impuesta al final de este plazo.</p>
<p>279</p>	<p>Audiencia Preparatoria del Juicio. A solicitud de cualquiera de las partes, se celebrará Audiencia Preparatoria del Juicio, dentro de los cinco días anteriores a la celebración del Juicio oral y público, para resolver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuestiones relacionadas con las controversias surgidas en relación con el intercambio de la información sobre los elementos de prueba; 2. La solicitud de exclusión de alguna prueba ofrecida; 3. Precisar si hay acuerdo sobre hechos que no requieran ser probados en Juicio, y, 4. Ultimar detalles sobre organización del Juicio
<p>281</p>	<p>Del Juicio oral y público. Principios. El Juicio se realizará sobre la base de la acusación, en forma oral, pública, contradictoria y concentrada.</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
287	<p>Del Juicio oral y público. Oralidad. La audiencia pública se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participen en ella. Durante el Juicio, las resoluciones serán fundadas y dictadas verbalmente en forma clara y audible por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, dejándose constancia en el acta del Juicio.</p> <p>El principio de oralidad no excluye la posibilidad que durante el Juicio puedan ser incorporados para su lectura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las pruebas que se hayan recibido mediante la diligencia de anticipo jurisdiccional de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito, cuando sea posible; 2. La prueba documental, informes y certificaciones, y, 3. Las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el Juicio fuera de la sala de audiencias.
296	<p>De la intervención de jurado. Entrevista a candidatos y recusación. Al iniciar el Juicio oral, los acusadores y defensores podrán realizar a cada uno de los candidatos a miembro de jurado, las preguntas que consideren conveniente.</p> <p>El juez controlará su pertinencia . . .</p>
303	<p>Del desarrollo del Juicio. Apertura.</p> <p>En el día y hora fijados, el juez se constituirá en el lugar señalado para el Juicio, verificará la presencia e identidad de las partes, sus defensores y, si es el caso, de los miembros del jurado.</p> <p>Luego de tomar la promesa de ley a los miembros del jurado, declarará abierto el Juicio y ordenará al secretario dar lectura al escrito de acusación formulado por el Ministerio Público y por el acusador particular si lo hubiera. Seguidamente el juez explicará al acusado y al público la importancia y significado del acto, advertirá a las partes que en ningún momento se deberá hacer mención de la posible pena que se pueda imponer al acusado y, si procede, informará al jurado acerca de los hechos en los que las partes están de acuerdo y en consecuencia no requerirán ser probados durante el Juicio.</p> <p>A continuación se procederá, en forma sucinta, a la exposición en el orden de las acusaciones por el fiscal y el acusador particular, si hay, y seguidamente a la exposición por el defensor de los lineamientos de su defensa.</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
307	<p>Desarrollo del juicio. Testigos.</p> <p>Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el Juicio. No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero el juez o el jurado, según el caso, apreciará esta circunstancia al valorar la prueba.</p> <p>El juez moderará el interrogatorio y, a petición de parte o excepcionalmente de oficio, evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes; procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas.</p> <p>Después de que el juez tome la promesa de ley al testigo, la parte que lo propone lo interrogará directamente. A continuación la contraparte podrá formular repreguntas al testigo y, terminadas éstas, la parte que lo propuso podrá nuevamente formularle preguntas limitándose, en esta oportunidad, a la aclaración de elementos nuevos que hayan surgido en el contrainterrogatorio realizado por la contraparte.</p> <p>Después de su declaración, se informará al testigo que queda a disposición del tribunal hasta la finalización del Juicio, que puede permanecer en la sala o retirarse y de ser necesario podrá ser llamado a comparecer nuevamente a declarar cuando así lo requiera cualquiera de las partes. Estas podrán solicitar que un testigo amplíe su declaración cuando surjan elementos o circunstancias nuevos o contradictorios con posterioridad a su declaración.</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
322	<p>Del veredicto, el fallo y la sentencia. Debate sobre la pena. Conocido el fallo o veredicto de culpabilidad, el juez procederá a calificar el hecho y, en la misma audiencia o en audiencia convocada para el día inmediato siguiente, concederá sucesivamente el uso de la palabra al fiscal, al acusador particular si lo hubiere y al defensor para que debatan sobre la pena o medida de seguridad por imponer. Seguidamente ofrecerá la palabra al condenado por si desea hacer alguna manifestación. El juez podrá limitar razonable y equitativamente el tiempo de las intervenciones. En este trámite se aceptará la práctica de la prueba pertinente.</p>
327	<p>Del juicio por faltas. Audiencia inicial y mediación. Admitida la acusación, el juez citará a las partes a la Audiencia Inicial. En el momento de recibir la acusación, el juez interrogará a las partes sobre la previa celebración de trámite de mediación y lo promoverá, si procede, en la forma prevista en el presente Código.</p>
331	<p>Del juicio por faltas. Juicio. Las partes comparecerán a la audiencia con todos los medios probatorios que pretendan hacer valer.</p> <p>El juez oír brevemente a los comparecientes, apreciará conforme el criterio racional los elementos de convicción presentados y absolverá o condenará en el acto expresando claramente sus fundamentos. La sentencia se hará constar en el acta del Juicio.</p> <p>Si no se incorporan medios de prueba durante el Juicio, el juez decidirá sobre la base de los elementos acompañados con la acusación.</p>
342	<p>De la revisión de sentencia. Audiencia. Admitida la revisión, la Sala Penal del Tribunal de Apelación o de la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, dará audiencia dentro de los diez días siguientes al Ministerio Público y a las partes que hayan intervenido en el proceso principal para que comparezcan con los medios de prueba que funden la acción o se opongan a ella. La diligencia se celebrará con la participación de los intervinientes que se presenten, quienes expondrán oralmente sus pretensiones.</p> <p>Son aplicables en lo que corresponda las disposiciones sobre audiencia oral en el Juicio por Delitos. (negrita no es del original)</p>
363	<p>De los recursos. Disposiciones generales. Interposición. Para ser admisibles, los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión. Si se desea solicitar vista oral se deberá manifestar en esta oportunidad . . .</p>

ARTICULO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
370	<p>De los recursos. Disposiciones generales. Renuncia a vista oral. En los recursos de apelación y casación, una vez recibidos los autos en la sede del tribunal de alzada y habiendo éste proveído la radicación de los autos ante sí, no se requerirá convocar a audiencia oral cuando no lo haya solicitado ninguna de las partes o cuando no deba recibirse prueba oral, quedando el recurso en estos casos en estado de fallo.</p>
374	<p>Del Recurso de Reposición. Trámite. Salvo en las audiencias orales, en que se deberá plantear en el acto, este recurso se presentará mediante escrito fundado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la resolución impugnada.</p> <p>Admitido el recurso, el juez convocará a audiencia pública en un plazo no mayor de tres días, con el propósito de oír a las partes y resolver.</p> <p>Cuando el recurso se interponga durante una audiencia oral, el tribunal oírán en el acto a la parte contraria y resolverá de inmediato. La decisión que recaiga se ejecutará en el acto.</p>
383	<p>Del recurso de apelación. Emplazamiento y audiencia. Recibidos los autos, si fuera procedente, el tribunal competente convocará, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la recepción, a audiencia oral para que las partes comparezcan y fundamenten su recurso y su contestación mediante la expresión de los argumentos que consideren oportunos.</p> <p>La vista se desarrollará en lo no previsto expresamente en este capítulo, de acuerdo con las normas del Juicio por Delitos sin jurado que resulten de aplicación.</p>
396	<p>Del recurso de casación. Audiencia oral. Si al interponer el recurso o al contestarlo, alguna de las partes ha solicitado la celebración de audiencia oral o deba recibirse prueba oral para la demostración del vicio señalado en el recurso, la Sala fijará fecha para su realización dentro de los quince días siguientes a la recepción del recurso a trámite.</p> <p>La audiencia se celebrará en el día y hora fijados, con asistencia de los miembros de la Sala y de las partes que concurran. La palabra será concedida primero al abogado del recurrente y luego a las demás partes. Si es necesaria, la prueba se practicará de la forma dispuesta en este Código. . .</p>
404 pfo.3)	<p>De la ejecución penal. Incidentes de ejecución. Los incidentes relativos a la libertad anticipada y aquellos en los cuales, por su importancia, el Juez de Ejecución de la pena lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral citando a los testigos y peritos que deben informar durante el debate.</p>

CIENCIAS PENALES

Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica
JULIO 1996

AÑO 8, N° 11

EDITORIAL

DOCTRINA EXTRANJERA

⌘ Juicio Penal

Abreviado. José I.
Cafferata Nores

⌘ La mujer ante el

Derecho Penal.

Elena Larrauri

⌘ Acerca de la

motivación de los

hechos en la

sentencia penal. II

Parte. Perfecto

Andrés Ibáñez

DOCTRINA NACIONAL

LA ORALIDAD COMO FACILITADORA DE LOS FINES, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL*

Daniel González Álvarez **

Hoy prácticamente no se discute sobre la necesidad de realizar la justicia penal a través de un procedimiento oral. Como bien se puntualizó, el juicio oral es parte importante de la tradición y la cultura occidental, al haber sido acogido por la mayoría de los países occidentales porque es el que mejor (no el único) permite hacer justicia y a la vez respetar la libertad y la dignidad del hombre(1).

La aceptación o el rechazo de la oralidad no debe ser el problema inicial a plantearse, cuando se quiera definir una determinada política legislativa en materia procesal penal, sino por el contrario, lo primero que deben aclararse y redefinirse son las garantías y los objetivos básicos del proceso, para luego examinar cuál sistema (escritura-oralidad) constituye un instrumento más adecuado para conseguir aquellos fines y cuál garantiza mejor los derechos fundamentales. La posibilidad de implementarla y fortalecerla en los distintos países de América Latina, ha dependido más de consideraciones presupuestarias infundadas, que en obstáculos ideológicos de política criminal.

Pretendemos exponer, de manera sintética, algunas consideraciones, que justifican calificar el sistema oral como el más apto para realizar los más trascendentes fines, principios y las garantías básicas del

✦ Abolicionismo y
democracia. Cecilia
Sánchez Romero -
Mario Alberto
Houed Vega

✦ La reacción
frente al delito.
Ricardo Salas
Porras

✦ Política anti-
drogas y sus
efectos en América
Latina. Roy Murillo
Rodríguez

JURISPRUDENCIA

✦ Jurisprudencia
penal reciente.
Cecilia Sánchez
Romero

proceso penal.

Por lo general, la oralidad no abarca todas las fases del proceso.

Todavía aparece incrustada la instrucción, con mayor o menor incidencia en la fase de juicio. Hemos estado afirmando que el proceso es oral porque tiene una segunda fase de juicio caracterizada por la inmediación, el contradictorio, la continuación, la publicidad. La verdad es que "un proceso penal es oral, si la fundamentación de la sentencia se realiza exclusivamente mediante el material de hecho, introducido verbalmente en el juicio."(2).

En ocasiones hemos abusado de esa caracterización, pues no resulta infrecuente observar un proceso que denominamos como oral, cuando lo cierto es que ha durado varios meses, incluso años, dedicados a la investigación policial, a la instrucción judicial, a las actuaciones preparatorias del juicio, y luego, precedido por un debate penal de unas horas de duración. Al final afirmamos que existe un proceso oral, cuando lo cierto es que ha sido fundamentalmente escrito, con un final de oralidad. Y muchas veces esa oralidad no es siquiera tal, como ocurre con el denominado sistema pseudo oral. En efecto, "...el sistema de pseudo-oralidad es una patología de la práctica del sistema oral, que virtualmente lo convierte en escrito: se trata del sistema que, si bien es oral, permite que las audiencias se discontinúen, en forma que a los testigos se los vaya interrogando por separado y en forma discontinuada, a lo largo de varias semanas y hasta meses. La discontinuidad de las audiencias hace que el tribunal no tenga presente las circunstancias del caso a la hora de dictar sentencia y, en definitiva, ésta se dicte con los elementos escritos, lo cual también puede delegarse..."(3).

El sistema oral al que nos referimos como el más idóneo para realizar los fines, los principios y las garantías procesales, es al sistema oral de verdad, donde la sentencia se sustenta con el material probatorio introducido al juicio mediante la oralidad.

1. LA ORALIDAD EN LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS:

La oralidad no sólo constituye un fenómeno cultural occidental, por haber sido incorporada en la mayoría de las legislaciones penales, sino además es el sistema al que se refieren las convenciones internacionales.

En efecto, la mayoría de las convenciones internacionales dedicadas a la delimitación de los Derechos Humanos se inclina por el sistema de la oralidad para la justicia penal. porque efectivamente ese sistema tiene mayor posibilidad de proteger y tutelar los derechos básicos del hombre que los modelos escritos.

Desde luego con ello no se pretende afirmar, como algún crítico lo señalaba, que la oralidad se cree el único sistema de justicia penal. sino simplemente el que mejor facilita la realización de sus fines.

Para confirmar esa tendencia de los instrumentos Internacionales de derechos humanos, veamos lo que disponen algunos de ellos:

a) La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (Aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos, en San José el 22 de noviembre de 1969).

El Pacto de San José de Costa Rica establece implícitamente la oralidad, al disponer en su artículo 8.2.f. que durante el proceso. toda persona tiene derecho, en plena igualdad y entre otras, a la siguiente garantía mínima: f) "derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos". Lo anterior supone, necesariamente, que el proceso deba ventilarse en forma oral, para poder tener derecho a los interrogatorios, y para tener la facultad de proponer con ese mismo fin la cita de otros testigos y peritos que puedan "arrojar luz sobre los hechos".

Esa disposición es complementada por el artículo 8.5. que señala que el proceso penal debe ser público, lo que equivale a admitir la necesidad de que el juicio se realice frente a los ciudadanos, y ello solo será posible con la oralidad(4).

b) El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
(Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en

resolución 2200 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, en vigencia desde 23 marzo de 1976)

De manera más directa el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se inclina por la oralidad también, al disponer en el artículo 14.1. que "... Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial...", lo que puede hacerse, necesariamente, sólo por medio de un juicio oral.

Al igual que el Pacto de San José, éste otro también dispone, en el artículo 14.3.e., que durante el proceso, toda persona acusada de delito tendrá derecho, en plena igualdad y entre otras, a la siguiente garantía mínima: e) "a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo".

En consecuencia, todos los estados suscriptores de estos Pactos encuentran un verdadero asiento jurídico para legitimar la implementación de la oralidad en sus respectivos territorios.

c) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Aprobada en la Novena Conferencia internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948)(5).

También en este texto internacional se encuentra una referencia expresa a la oralidad, pues el párrafo segundo del artículo XXVI dispone que "Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes, y a que no le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas."

Al igual que con los textos antes comentados, este refiere en forma directa a un juicio donde públicamente debe ser oído el acusado.

d) La Convención de salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales. (Roma, 4 de noviembre de 1950, Consejo de Europa)(6).

Esta Convención dispone, de manera similar a las anteriores, en el

artículo 6.1, que "toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable... La sentencia debe ser hecha pública..."; y en el artículo 6.3.d. agrega que todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: d) "Interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la convocatoria y el interrogatorio de los testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo", lo que también puede ser conseguido sólo por medio de un juicio oral.

e) Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento penal (Reglas de Mayorca)(7).

Finalmente, deben mencionarse las denominadas Reglas de Mayorca, que son objeto de discusión por Naciones Unidas, con el fin de orientar las reformas a los sistemas penales del mundo, que esperan servir de modelo, como la incidencia profunda que tuvo en las legislaciones penitenciarias las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, que pasaron a constituir la Carta Fundamental de los Derechos de los Reclusos.

La recomendación 252.1 señala en forma directa, para no dejar ningún margen de duda, que "el imputado tiene derecho a un juicio oral". Las reglas contenidas en la parte 252.2, y 292.1 complementan la anterior, al disponerse que los debates serán públicos, y que todas las pruebas deben ser practicadas ante el tribunal sentenciador (con intermediación).

f) El Código Procesal Penal Modelo para América Latina(8).

Ya que hacemos referencia a un modelo de Naciones Unidas sobre la justicia penal, creo justo mencionar también el "Código Tipo" redactado con base en una idea de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, por juristas hispano-lusoparlantes dedicados al Derecho Procesal Penal, alrededor del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el que participaron muchos juristas de renombre, entre los que deben destacarse Fernando de la Rúa, Julio Maier, Ada Pellegrini y Jaime Bernal Cuellar.

Ese modelo sigue la estructura, los principios y las reglas del juicio oral, público, contradictorio, continuo, concentrado, recomendando así

a los países del área su adopción, como un instrumento bastante mejor que el sistema escrito para la administración de justicia penal.

2. LA ORALIDAD COMO FACILITADORA DE LOS FINES, PRINCIPIOS Y GARANTIAS DEL PROCESO PENAL:

Como bien se señala, la oralidad no constituye un principio en sí mismo, sino que es un instrumento o facilitador de los principios políticos básicos y de las garantías que estructuran el propio sistema procesal penal(9).

Ello es importante tomarlo en consideración porque al discutirse acerca de la opción entre un sistema oral y uno escrito, no se discute alrededor de cuestiones ideológicas, sino pragmáticas, y lo que debe tomarse en cuenta para adoptar uno en lugar del otro es, principalmente, su eficacia para realizar y cumplir los principios básicos y las garantías que constituyen la base del sistema procesal. Antes de definirse por la oralidad y adoptarla en la legislación nacional, deben escogerse y señalarse los principios básicos y las garantías(10) con las cuáles se desea juzgar a las personas acusadas de delito. Luego debe buscarse el mejor instrumento para conseguir esos objetivos.

Si se concluye por los principios de inmediación, concentración, continuación, contradictorio, sana crítica, publicidad, identidad física del juzgador, entre otros, definitivamente termina pesando mucho más el sistema oral frente al escrito; observemos por que.

a) La inmediación.

La inmediación puede ser enfocada desde dos ángulos, y como se verá, desde cualquiera de ellos la oralidad es el mejor medio para alcanzarlos.

En efecto, la inmediación subjetiva o formal que exige que el Tribunal que va a dictar la sentencia tome conocimiento directo y en consecuencia se forme así su convicción, del material probatorio que ha sido reproducido en su presencia, junto con todos los demás sujetos del proceso(11), puede ser garantizada principalmente por medio de un juicio oral, que obliga a todas las partes, al Juez y al

Fiscal, estar presentes en el juicio y a proceder a recibir en forma directa, sin delegación y sin solución de continuidad, todos los elementos de prueba aceptados en el juicio(12). Al no existir actas que después van a ser leídas, los jueces están obligados a recibir en forma directa la prueba, sin posibilidad siquiera de delegar.

Por el contrario, en el sistema escrito la recepción de la prueba se caracteriza por estar delegada en oficiales receptores de prueba (escribientes, oficinistas, secretarios), que son los que escuchan los relatos de los testigos, de los peritos, de la víctima y del acusado, y luego los traduce en una acta que el Juez firma como si hubiera estado presente, con base en la cual tomará y sustentará sus conclusiones fácticas y jurídicas sobre el caso.

Por otro lado, **la intermediación objetiva o material**, según la cual el Tribunal debe obtener el conocimiento y formar su convicción, utilizando el medio probatorio más cercano al hecho a probar, entre todos los medios concurrentes(13), también es posible alcanzarla principalmente por medio de la oralidad, de manera más eficiente que la escritura, pues la comparación y el análisis se facilitan bastante más cuando los elementos de prueba son recibidos por todos los sujetos del proceso, de manera concentrada y continúa, como se realiza en el juicio oral. En los procesos escritos se interponen largos períodos entre la recepción de un elemento probatorio y otro, dificultando apreciar cuáles serán los más directos para probar el hecho.

Desde luego la intermediación no necesariamente debe ser absoluta, como bien se afirma(14), pues aún en el juicio oral es posible introducir ciertos elementos de prueba por lectura o exhibiéndolos, que sin intermediación proporcionan una información exacta y libre de objeciones, como serían las fotografías, cintas magnetofónicas, las videocintas, y ciertas actas cuando no son cuestionadas por las partes, como los planos, mapas, dictámenes periciales, etc.

b) La concentración y la continuación

La concentración y la continuación exigen que el juicio oral se realice frente a todos los sujetos procesales, desde el inicio hasta su

terminación, de una sola vez y en forma sucesiva, sin solución de continuidad, con el propósito de que exista la mayor proximidad entre el momento en que se recibe toda la prueba, formulan las partes argumentaciones y conclusiones sobre ella, deliberan los jueces y se dicta sentencia. "Ello sirve para proteger al delincuente, al no prolongar la tensión psicológica que genera el juicio; refuerza la creencia del pueblo en la justicia al garantizar una decisión rápida; y posibilita una mejor investigación de la verdad"(15).

La concentración está directamente referida a los sujetos del proceso y a la recepción de la prueba, y la continuidad a los actos procesales que deben realizarse en el juicio.

La oralidad impone, inexorablemente, la concentración y la continuidad, porque los debates prolongados conllevan el peligro de que se olvide lo actuado, al no existir actas que transcriban literalmente (o interpreten) lo que han declarado los testigos y los peritos, de donde debe concluirse que la posibilidad de retener el contenido de la prueba se debilita frente a la cantidad de intermedios e interrupciones, de ahí que deba vincularse al tribunal y a los sujetos del proceso, en forma continua e ininterrumpida(16).

La oralidad implica necesariamente esa concentración y esa continuidad, para que pueda operar correctamente la actividad de los sujetos procesales en el análisis del material probatorio. A diferencia de la escritura, donde la prueba es recibida en forma discontinua, en diferentes momentos y a lo largo de varios meses, incluso muchas veces con años de distancia entre una y otra.

Desde ese punto de vista la concentración y la continuidad son exigencias procesales cuya realización se verifica con la oralidad(17).

Desde luego que tales exigencias tampoco son categóricas. El absolutismo en este terreno también puede distorsionar la solución adecuada. En principio el debate debe celebrarse en forma continua y sólo se puede interrumpir para atender el descanso diario, o por necesidades fisiológicas, pero también otras razones pueden justificar la suspensión y la postergación de la audiencia oral para otra fecha,

como serían, por ejemplo, impedimento o enfermedad de alguno de los sujetos del proceso, la ampliación de la acusación que justifique preparar actos de defensa, la realización de actos fuera de la audiencia como una inspección ocular, la incomparecencia de órganos de prueba esencial(18).

c) El contradictorio

En el proceso penal es necesario garantizar la recepción de la prueba bajo el control de todos los sujetos del proceso, con el fin de que ellos tengan la posibilidad de intervenir en esa recepción haciendo preguntas y observaciones, solicitando aclaraciones, vigilando la forma en que la prueba se introduce al proceso, apreciando la manera que las demás partes también realizan esa misma labor y luego, debe garantizarse que puedan evaluar las pruebas para apoyar sus conclusiones.

Ese control se extiende también a las argumentaciones de las partes, en la medida en que debe garantizarse que puedan escuchar de viva voz los argumentos de la contraria, para apoyarlos o rebatirlos, observando desde el inicio la manera como lo plantean al Tribunal(19). Pues bien, de nuevo la oralidad se presenta como el mejor facilitador de ese principio básico del sistema procesal penal, al recibirse en forma directa, sin intermediarios y de manera continua y concentrada toda la prueba, exigiéndose la presencia de todos los sujetos del proceso. La escritura, caracterizada por delegar la recopilación de la prueba en funcionarios auxiliares del Juez, así como también caracterizada por la discontinuidad de esa recepción, no resulta un instrumento idóneo para realizar el contradictorio, máxime que tampoco exige la presencia de todos los sujetos a ese momento, sino que conforme examinen las actas podrán ir formulando sus apreciaciones por separado hasta formar gruesos expedientes, de los que deben extraerse las piezas importantes de otras que no lo son.

d) La publicidad

Uno de los aspectos más importantes que debe buscar cualquier proceso de reforma de la justicia penal en América Latina lo

constituye, sin lugar a dudas, la necesidad de que nuestros jueces asuman un mayor protagonismo social en relación con la solución del conflicto, que se dejen las delegaciones de las tareas jurisdiccionales más importantes (como ocurre en el sistema escrito), que los perciban los ciudadanos ejerciendo sus funciones, que asuman mayor compromiso con la solución de los problemas que más afectan a los habitantes de su circunscripción en lo que se refiere a la justicia penal y, en definitiva, que sean agentes del proceso político y social en una determinada sociedad(20).

Por otra parte, es necesario que la "justicia penal" se administre de frente a la comunidad, que los ciudadanos puedan apreciar la manera como los jueces ejercen su función, evitando o al menos poniendo en evidencia y criticando excesos, abusos o bien impunidad. La participación de los ciudadanos en la administración de justicia no se agota con su incorporación como jurados o escabinos, sino que comprende también la posibilidad de que puedan presenciar el juzgamiento penal, desde el momento en que se anuncia la acusación, hasta el momento en que se reciben los elementos de prueba, se formulan conclusiones y alegaciones y se dicta sentencia(21).

No es por casualidad que la publicidad del proceso se vincula directamente con la esencia misma del sistema democrático(22).

Estas posibilidades, desde luego, requieren que el juicio sea simple, rápido, concentrado, continuo, con inmediación y contradictorio, pero sobre todo público, que los ciudadanos puedan concurrir al tribunal a presenciar el juicio, o bien que al menos lo hagan los periodistas y éstos informen de lo que ocurre en la Sala del Tribunal. De nuevo el que mejor contribuye a la realización de esos ideales lo sigue siendo el juicio oral frente al escrito(23). El juicio escrito se vincula directamente con el secreto, pues se acompañan muy bien y se refuerzan el uno al otro, mientras que la oralidad permite la transparencia que los propios ciudadanos demandan para la actuación de los jueces.

e) El principio de libre valoración de la prueba (sana crítica)

Otro de los principios básicos referidos a la prueba que se pretende

fortalecer en la justicia penal, es el de libertad en la valoración de la prueba. Frente al sistema tarifario (prueba legal o tasada) y al sistema de la íntima convicción (prueba en conciencia), se busca fortalecer el sistema de la libre convicción o sana crítica, según el cual el Juez es libre de asignarle el valor a los elementos de prueba reproducidos en el juicio, pues el legislador no señala anticipadamente presunciones probatorias, ni tampoco tasa su valor según la naturaleza, la clase, o el origen de la misma, sin embargo el Juez se encuentra en la ineludible tarea de expresar las razones por las cuales asigna un determinado valor a dichas pruebas y forma su convicción (deber de fundamentación) lo cual lo separa del jurado(24).

De nuevo también es la oralidad la que permite cumplir con ese principio básico, bastante mejor que el proceso escrito. En efecto, la oralidad garantiza mejor el cumplimiento de las reglas que rigen la apreciación de las pruebas, porque en forma directa, sin intermediarios, el Juez o Tribunal debe recibir todos los elementos de prueba, frente a todas las partes, lo cual le permite apreciar la veracidad de la misma según las reglas de la lógica, la experiencia, la psicología y el sentido común, con mayor posibilidad que cuando simplemente valora un documento o transcripción de prueba(25).

El proceso oral no se inmuniza contra el falso testimonio, pero permite detectarlo con mayor posibilidad de éxito que el sistema escrito, donde los oficiales receptores de pruebas -por lo general sin preparación adecuada- traducen o interpretan la versión de los testigos y en muchos casos hasta les facilitan mentir, o en el mejor de los supuestos desnaturalizan o mutilan su relato, transcribiendo en actas lo que ellos creyeron que dijo el testigo.

Como bien se ha expuesto(26), en el sistema escrito a) no hay posibilidad de apreciar los rasgos humanos genéricos de los declarantes o el lenguaje de sus gestos tan importantes para la valoración; b) hay una gran infidelidad o insuficiencia del acta con lo verdaderamente declarado, por traducción, síntesis, ignorancia o desinterés de quien recibe la prueba; y c) no hay un conocimiento del

caso en todo su conjunto, por parte de quien recibe la prueba, lo que provoca importantes lagunas.

f) La identidad física del juzgador

El principio de identidad física del juzgador establece que un mismo juez debe serlo sobre toda la audiencia del debate oral, y además debe ser él quien personalmente dicte sentencia, sin posibilidad de delegación. Lo anterior garantiza que la decisión final es adoptada por quien o quienes presenciaron en forma directa e inmediata tanto los elementos de prueba reproducidos en la audiencia, cuanto los alegatos de las partes referidas a todas las cuestiones debatidas(27). Indiscutiblemente que la oralidad es el instrumento que mejor podría garantizar la realización de ese principio, al exigir que los mismos jueces que habrán de resolver el caso deban presenciar y dirigir los actos del juicio oral, y que esa asistencia es obligatoria e imprescindible.

Por el contrario, el proceso escrito no garantiza esa situación porque permite delegar la mayoría de las actividades jurisdiccionales de trascendencia, desde la recepción de la prueba hasta -incluso hasta- el dictado de la sentencia, cuando esas tareas se trasladan a auxiliares administrativos y asistentes letrados, por lo general, anónimos, desconocidos, sin posibilidad de recusación siquiera(28).

g) La fundamentación de la decisión judicial

Uno de los aspectos vitales que caracterizan el funcionamiento de la justicia penal en un sistema democrático es el deber de fundamentación.

Los jueces, como depositarios de la ley, están en la obligación de señalar en sentencia las razones en que sustentan cada una de sus conclusiones, tanto desde el punto de vista fáctico, como desde el punto de vista jurídico. Para tales efectos deben realizar un conjunto de razonamientos de hecho y de derecho, para prevenirse de la arbitrariedad y de la íntima convicción, por medio de los cuales se le explica a los interesados y a la colectividad que se estudió el asunto, que se respetó el ámbito de la acusación, que se recogieron las

pruebas, que se valoraron, que se razonó utilizando la lógica, la experiencia y el sentido común, es decir que se respetaron los derechos fundamentales.

Para cumplir con ese cometido, el Tribunal debe expresar en qué consiste el hecho acusado, cuál fue el hecho probado y cuales sus circunstancias, que medios probatorios se introdujeron al juicio, cuál fue el iter lógico seguido para justificar cada una de esas conclusiones fácticas, debe además realizar la fundamentación jurídica referida a la calificación del hecho, a la pena a imponer, a las consecuencias civiles derivadas de la acción delictiva, y cualquier otra cuestión de importancia que se haya debatido (fundamentación fáctica, fundamentación probatoria y fundamentación jurídica)(29).

El sistema oral es el que mejor permite cumplir con ese cometido porque todos los protagonistas del juicio perciben en forma directa la reproducción de la prueba; y porque facilita y simplifica la labor de las partes que deben explicar al tribunal sus pretensiones, observaciones y conclusiones utilizando un medio de comunicación directo, inmediato y rápido, como lo es la palabra; y a la vez, les facilita a los jueces su deber, porque éstos también apreciaron de manera directa, sin intermediarios, la recepción de todos los elementos probatorios y las alegaciones de las partes, se está en mayor grado de aproximarse a la verdad que el sistema escrito.

Por un lado el sistema procesal elimina las presunciones legales trasladándole al juez el deber de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, sin determinarle un valor específico, pero por otro el sistema le exige a ese juez "más libre" que fundamente y motive su conclusión, expresando en forma clara, precisa y detallada las razones que lo motivaron a asignarle un determinado valor a cada uno de los elementos de prueba esenciales(30). Ello exige colocarlo en una situación en que mejor pueda cumplir su cometido, y esa posición mejor se la brinda la oralidad, al menos frente a la escritura.

h) La redefinición del conflicto penal por otro de menor violencia

Por lo general, la justicia penal no llega a solucionar el conflicto

provocado con el delito, y por ello hoy se afirma que debe aspirar, al menos, a la transformación o redefinición de ese conflicto, en términos pacíficos, en otros conflictos que tengan un contenido menor de violencia, por su baja intensidad o por su alta cuota de institucionalidad(31). En efecto, "la redefinición de los fines del proceso ya se está discutiendo universalmente y se manifiesta, fundamentalmente, en el abandono de la búsqueda de la verdad como meta irrestricta del proceso y su sustitución por un conjunto de mecanismos procesales que, siempre respetuosos de la dignidad humana, se dirijan al objetivo de lograr un acercamiento entre las partes en conflicto social que subyace en cada caso penal para que alcancen un acuerdo, una reparación, una conciliación: el consenso por encima del descubrimiento de la verdad..."(32). Lo anterior debe ser tomado en consideración para definir, por un lado, si se acepta la oralidad como instrumento facilitador de los fines del proceso y por otro, para delimitar los alcances y la trascendencia de la oralidad una vez que se ha aceptado.

Cuando se plantea la necesidad de redefinir el conflicto penal por otro de menor violencia, o al menos de mayor aceptación, resulta indispensable la presencia (concentración, intermediación) de todos aquellos que de algún modo deban cumplir un papel relevante en ese proceso de redefinición: imputado, víctima, encargados estatales de conducir el proceso, etc. y el juicio oral se presenta como el mejor instrumento para lograrlo.

Tan relevante es este cometido de la justicia penal, que "...si los jueces no son atentos vigilantes de que el conflicto que redefina la justicia penal tenga un menor contenido de violencia y de ese modo contribuya a la paz social, los mismos protagonistas del caso inicial buscarán otros mecanismos para solucionarlo o redefinirlo por sus propios medios"(33).

La oralidad es reconocida como el instrumento idóneo para alcanzar esos fines, puesto que permite a los interlocutores resolver sus diferendos de manera más simple y directa, sin intermediarios y en

forma inmediata.

Por el contrario, la escritura no facilita ninguna solución, ni siquiera permite intentarlo, al desplazar las relaciones entre los protagonistas del conflicto, al extremo de que en la mayoría de los casos durante el proceso nunca llegarán a estar reunidos en una sola actuación jurisdiccional.

i) La averiguación de la verdad real

La finalidad básica del proceso penal, planteado en términos tradicionales, ha sido siempre la búsqueda de la verdad real o material (para acentuar que existe otra verdad, la formal que en contraposición debe ser ideal o irreal, muy propia de nosotros los abogados). Todavía hoy tiene vital importancia como delimitadora de la actividad probatoria en el proceso penal, complementada por principios básicos como el de libertad probatoria.

Desde ese punto de vista el proceso tiene por objeto averiguar la verdad respecto del hecho acusado, ya sea para confirmar su existencia o para descartarla, ya sea que implique determinar la autoría del imputado en el hecho, ya sea que la descarte.

Entendido el proceso como ese conjunto de actuaciones dirigidas a reconstruir el hecho hasta donde los elementos probatorios lo permitan, se puede concluir también que la oralidad se presenta como el mejor instrumento para lograrlo.

Los atributos propios de la oralidad, desde su sencillez hasta la exigencia de la concentración, continuación, intermediación, publicidad y transparencia, hacen que el sistema sea más eficiente para aproximarse en un mayor grado a la verdad que el sistema donde esa investigación se delega en auxiliares, se prolonga en el tiempo, se complica con formalismos estériles.

Con la oralidad es posible reducir al máximo los márgenes de duda, pues los elementos de prueba se reciben en forma directa y personal por todos los sujetos del proceso, quienes por esa razón estarán en mayor posibilidad de valorarlos y de apreciar una serie de circunstancias que no podrían percibir con la lectura de un acta

levantada por un auxiliar del Juez, además de que tienen la posibilidad de intervenir en la recepción de la misma, interrogando a los testigos y peritos, aclarando y ampliando circunstancias de interés para la decisión que quizás no habría visto nunca aquel auxiliar del tribunal.

j) La desformalización de la justicia penal

La desformalización de la justicia penal no constituye un principio procesal, ni siquiera es una garantía, sino tan solo un objetivo de carácter meramente instrumental para facilitar el conseguimiento de los fines del proceso. Ello no significa que pueda soslayarse su necesidad, pues al igual que la celeridad de la justicia, constituyen factores que deben tomarse en cuenta en cualquier proceso de transformación.

La administración de justicia penal viene caracterizándose en América Latina por ser excesivamente formal, donde lo rutinario, lo incidental, lo superfluo adquiere cada vez mayor trascendencia y se deja, cada vez más lejos, el conflicto social que le dio origen y el conflicto social que provoca su propia existencia. Los abogados recibimos una formación dirigida excesivamente al análisis legalista y normativo de los conflictos sociales, y tendemos a anteponer la norma sobre la realidad, creyendo que la realidad es la norma. Esto ha transformado en una excesiva rigurosidad formal, donde el rito adquiere significación propia, sin importar las razones para las cuales fue instaurado, hasta convertir el proceso en una complicada concatenación de actuaciones(34).

Incluso no basta con la adopción de textos legislativos avanzados y novedosos, que incorpora modernas instituciones procesales en la ley pues, en muchas ocasiones la práctica se encarga de desvirtuarla. Como bien se apunta "no basta la sanción legislativa del Código. La naturaleza del proceso jurisdiccional impone planear y preparar, después de la batalla parlamentaria, las duras batallas para "la promulgación" del nuevo Código en el seno de los tribunales, en las facultades, en la comunidad (las duras batallas contra el conservatismo, los hábitos burocráticos, los prejuicios). El proceso,

como la democracia misma, debe ser conquistado cada día"(35). Muchos son los males que aquejan a la justicia penal en América Latina, para citar solo algunos y como ha sido ya puesto en evidencia, entre esos males se encuentra: un excesivo avance de las tareas administrativas sobre las judiciales por parte de los jueces; duplicación de las tareas por falta de oficinas centrales que asuman todas las labores de una misma característica (correo, notificación, controles, etc.); graves deficiencias de comunicación entre los diversos operadores y organismos judiciales; desaprovechamiento de recursos humanos y materiales, por mala distribución de tareas; oscuridad en los registros de las oficinas; delegación de funciones judiciales en empleados subalternos; carencia de medios tecnológicos; deficiencia en infraestructura disponible y mal aprovechamiento de espacios; falta de capacitación de todos los operadores; carencia de sistemas estadísticos; sistemas procesales antiguos, formalistas y complicados, entre muchos otros(36).

De ahí entonces que uno de los grandes retos en el proceso de transformación es el de simplificar el juicio penal, llevándolo a una idea más cercana a lo cotidiano, a los procesos mediante los cuales estamos acostumbrados a resolver los conflictos en el seno de la familia, en el trabajo, con los amigos, en el club.

"Simplificar el proceso implica establecer claramente la primacía de lo substancial por sobre lo formal. Y lo substancial es el conflicto humano que subyace en el proceso. En este campo, la oralidad puede prestar un servicio mucho más grande que el de satisfacer algunos de los principios básicos del juicio. La utilización del mecanismo de la audiencia para solucionar todas las incidencias posibles sirve adecuadamente para lograr una mayor profundidad en el proceso penal"(37). En efecto, de nuevo la oralidad brinda como posible el cumplimiento de los objetivos más preciados de la justicia penal, como serían la redefinición del conflicto por otro de menor violencia, gracias a que la comunicación oral es mucho más simple, directa, y efectiva que la escritura, pues también cuentan los gestos, el tono, la

acentuación, la pausa y el sentimiento.

La oralidad brinda muy poco espacio al formalismo, y a pesar que algunos tribunales se esmeran en exigir formalidad, por suerte ello no pasa de constituir actos chistosos y anecdóticos de la judicatura, como resulta exigir corbata a los abogados, exigir "buena presentación" a las partes, exigir "respeto" en el lenguaje. etc.

k) Otros aspectos garantizados con la oralidad

La oralidad garantiza muchos otros principios procesales, así como también satisface mucho mejor que la escritura otros intereses de trascendencia en materia de justicia penal.

No pretendemos más que exponer algunos de los más evidentes con la anterior elencación, pero tómese en cuenta, además, que la oralidad pone en mayor evidencia que la escritura algunos de los problemas más graves de la administración de justicia, como la corrupción y el falso testimonio.

En efecto, el hecho de que los jueces deban resolver los asuntos en forma pública y de frente a la comunidad, permite a los ciudadanos observar, con bastante más eficacia que en el sistema escrito, alguna desviación, abuso o arbitrariedad realizada por cualquiera de los sujetos del proceso o por el propio tribunal. Desde ese punto de vista la justicia penal se hace más transparente, con todos sus defectos y limitaciones, pero a la vez pone en evidencia la necesidad de transformarla.

El sistema oral no está vacunado contra la corrupción y los abusos, pero al menos permite ponerlos en mayor evidencia con el fin de reprimirlos y eliminarlos. En el sistema escrito esos y otros muchos defectos ni siquiera se ponen de manifiesto, y en consecuencia, tampoco surgen los correctivos.

También la oralidad podría garantizar el efecto preventivo general de la sanción -si es que existe-, al permitirle a los ciudadanos apreciar las consecuencias jurídicas sufridas por quien comete un hecho delictivo(38).

Como bien se apunta, "el único desmedro de garantías que puede

señalarse al sistema oral es que el tribunal altere la versión de las pruebas recibidas en forma arbitraria y significativa para las conclusiones del fallo. No obstante, este peligro queda fácilmente conjurado con un doble registro magnetofónico de las audiencias, guardándose las cintas en sobre lacrado y firmado por las partes, durante los días necesarios para el vencimiento del término del recurso de revisión por violación de formas o arbitrariedad. El ínfimo costo de este medio técnico obvia cualquier objeción presupuestaria"(39).

Cuando se altera el contenido de la prueba oral en la fundamentación de la sentencia surge el problema de su control en casación. Creemos que las partes pueden hacer prueba en casación para establecer la forma en que se realizaron los actos procesales y dentro de ello, colmar cualquier irregularidad sobre el contenido de la prueba. Pero, indiscutiblemente que la mejor solución representa la posibilidad de que se grabe en cintas magnetofónicas el desarrollo de la audiencia, con el fin de que las partes puedan utilizarlas en casación sólo cuando aleguen que el Tribunal hubiere alterado el contenido de la misma al momento de dictar sentencia, o hubiere omitido examinar algunos aspectos esenciales, sin que esto implique que la casación sustituirá la valoración de esa prueba, sino sólo controlará la forma en que lo hizo el Tribunal de instancia, para verificar el respecto de las reglas de la sana crítica y del deber de fundamentación, es decir manteniendo todavía un control de legalidad(40).

3. LA ORALIDAD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION COLECTIVA

Todas las constituciones latinoamericanas y la mayoría de las convenciones de derechos humanos garantizan el derecho a la información y la libertad de prensa como valores esenciales de los ciudadanos.

Es indiscutible que la libertad de prensa, entendida en sus tres facetas más importantes: libertad de imprimir o publicar, libertad de expresión y libertad de información(41), constituye uno de los valores

fundamentales para el pleno desarrollo de la comunidad, gracias al cual los ciudadanos pueden ejercer con mayor propiedad gran parte de sus derechos y obligaciones sociales, como los derechos políticos y la libertad de crítica de la función pública.

A partir de estos derechos algunos entienden que la publicidad típica del proceso oral implica, también, un irrestricto acceso de los medios de comunicación colectiva en los estrados judiciales, pues los derechos colectivos (libertad de prensa) están por encima de los derechos individuales de los protagonistas del conflicto penal. Lo anterior lo acentúan cuando ponen en evidencia que las convenciones internacionales de Derechos Humanos (ya referidas al inicio de este trabajo) también establecen como una necesidad que el juicio sea público.

Esta idea ha provocado mucho daño a la administración de justicia cuando se ha pretendido absolutizar, pues ninguna libertad jurídica que se precie de serlo, se ejercita irrestrictamente y sin limitaciones. En realidad la libertad de prensa y el derecho a la privacidad y al honor no constituyen intereses jurídicos contrapuestos. El conflicto que pueda surgir entre ellos es sólo aparente y responde a un exceso en el ejercicio de uno de ellos. Como bien se afirma, "...no puede existir en sentido estricto un conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la honra más que por motivos de inadecuación. Lo que puede darse es un conflicto entre la pseudoinformación y el derecho a la honra, o un abuso en la concepción del derecho a la honra que pretenda obstaculizar el ejercicio del derecho a la información"(42). Lo mismo ocurre respecto a la privacidad y otros intereses públicos que deben tutelarse durante el desarrollo del juicio penal.

Si bien los Códigos modernos contienen pocas regulaciones al respecto, y por lo general dejan al propio Tribunal decidir cuándo el proceso penal oral debe ser privado, resultan convenientes algunas regulaciones al respecto, sobre todo para proteger el ejercicio normal de la judicatura, ante la presión que los medios ejercen para que se les facilite un acceso irrestricto en la audiencia, presión que se agudiza

cuando convierten a los jueces en héroes o villanos según sea que faciliten o restrinjan la labor de los periodistas.

Pero desde el punto de vista normativo lo primero que debe llamarnos la atención es que las convenciones internacionales, si bien establecen como necesario el principio de la publicidad para la justicia penal y reconocen la libertad de prensa, también señalan, en forma expresa que aquella publicidad debe ser restringida en ciertos casos, impidiéndose el acceso de la prensa y los ciudadanos a la Sala de juicio.

En efecto, el artículo 14.1. del **Pacto internacional de los derechos civiles y políticos** (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 2200 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, en vigencia desde 23 marzo de 1976); y el artículo 6.1. de la **Convención de salvaguardia de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales** (Roma, 4 de noviembre de 1950, Consejo de Europa), establecen restricciones al acceso de la prensa y del público por razones de moralidad, orden público o seguridad nacional. En igual sentido podemos citar el artículo 8.5. de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**, que establece que el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia".

Indiscutiblemente que el acceso de los medios de comunicación colectiva en la administración de justicia constituye un instrumento para evitar la arbitrariedad, los abusos, la inoperancia y hasta la corrupción de los funcionarios judiciales, al hacer más transparentes sus decisiones, lo que significa que esa intervención debe permitirse y facilitarse. Sin embargo ello no significa que puedan hacerlo en cualquier momento, como quieren hacerlo y en cualquier clase de juicio. Resulta indispensable alguna reglamentación para evitar que las cámaras de televisión y fotográficas, así como las luces que utilizan éstas, se conviertan en un mecanismo que de alguna manera pueda alterar la declaración de un testigo, perito, víctima o acusado en el proceso penal; así como también que la publicidad ponga en peligro o

afecte otros intereses también de vital importancia para la misma comunidad. Algunos incluso señalan que el acusado puede oponerse a que se difunda su imagen, aún siendo un personaje de actualidad o notoriedad(43). Ya estos sujetos se encuentran sometidos a algún tipo de presión por el solo hecho de comparecer ante un tribunal, frente a los jueces, las partes y personas allegadas a ellos que presencian el debate, cuando deben rendir declaración sobre ciertos hechos o circunstancias, en las que por lo general, todos están involucrados de alguna manera. Aumentar esa presión con la intervención de la prensa implica desconocer los objetivos para los cuales se instauró el sistema oral. Por esa razón parecen convenientes algunas regulaciones mínimas, que sin que lleguen a coartar el ejercicio de la actividad de los periodistas, tampoco obstaculicen la posibilidad de redefinir el conflicto social y de averiguar la verdad real. A ello es precisamente a lo que se refiere el Pacto de San José cuando señala (art. 8.5.) que si bien el proceso penal debe ser público, la publicidad debe excepcionarse en todo aquello "...que sea necesario para preservar los intereses de la justicia".

Hoy los ciudadanos no van a los juicios, de ahí que haya un traslado a la prensa del control que ejercían, pero ésta muchas veces publica los acontecimientos judiciales con algún grado de amarillismo y no existe una clara orientación pública sobre el proceder de los tribunales(44). Por lo anterior es conveniente establecer programas adecuados de información de parte del sistema de justicia penal, con el fin de contrarrestar cualquier distorsión en ese sentido. La publicidad tiene muchas ventajas, pero también es necesario controlar los pocos aspectos negativos que pueda generar.

4. LA IMPLEMENTACION DE LA ORALIDAD

Conforme se ha señalado atrás, la oralidad no constituye un principio en sí mismo, sino un instrumento y es el más adecuado -es decir no es el único- para facilitar la realización de los fines, principios y garantías del proceso penal. Por tal motivo lo discutible para optar entre la alternativa oralidad-escritura sigue siendo, **por un lado**, los principios,

los fines y las garantías del proceso, pues una vez determinados éstos debe buscarse el mejor instrumento para realizarlos en la práctica; y **por otro lado**, a lo sumo tiene trascendencia y deben examinarse algunas cuestiones prácticas para la implementación de uno u otro sistema.

a) Oralidad y aspecto económico

Uno de los mayores estigmas sobre la oralidad ha sido el aspecto presupuestario. Se afirma -con algún grado de convencimiento en algunos países- que el proceso oral tiene el grave inconveniente de constituir un sistema excesivamente caro para las economías de los sistemas judiciales latinoamericanos, muy necesitadas de recursos, pues con ella deben crearse locales para el juicio, con espacios para el público, deben contratarse más jueces, fiscales, y defensores, y que por lo general ameritan más recursos económicos que los sistemas escritos(45).

Estas críticas han sido ya contestadas magistralmente desde hace muchos años, al reafirmarse la necesidad de utilizar el instrumento más idóneo para facilitar y realizar los fines del proceso, superando el problema de los costos(46). En efecto, con muy buen tino se afirma que "...el costo del procedimiento sólo puede ser tomado en consideración cuando se trate de sistemas iguales en relación al respeto de los derechos de los ciudadanos que con ellos se relacionan y a la efectividad que tengan para la averiguación de los hechos que deban ser juzgados, pero cuando uno de los sistemas muestra marcadas falencias, mientras que el otro permite un mayor respeto a esos derechos y posibilita mejor la investigación, como ocurre al comparar el procedimiento escrito en relación con el que utiliza la oralidad en su fase principal, el aspecto monetario debe ocupar -necesariamente- un segundo plano, pues conforme lo veremos luego, son muchas las ventajas que conlleva la oralidad al procedimiento penal..."(47).

En todo caso conviene agregar que lo cierto es que no se han realizado estudios concluyentes para determinar que el proceso

escrito sea más barato que el proceso oral, pues en la mayoría de los casos lo que se ha comparado no ha sido la escritura con la oralidad, sino que se han hecho estimaciones y aproximaciones para comparar un sistema procesal tradicional, arcaico, fundamentalmente inquisitivo (aunque normativamente se diga mixto), que en la práctica aplica las presunciones y la prueba tasada, aunque formalmente se reconozcan los principios de libertad probatoria y sana crítica (libre apreciación de la prueba); con un sistema moderno, donde se pongan en vigencia los principios básicos reconocidos en las convenciones internacionales de derechos humanos para el juzgamiento penal, independientemente de que este proceso moderno sea oral. Es decir se ha bastantado el costo económico de un proceso penal tradicional con el costo de uno de corte moderno, inclinándose porque el primero es más barato. En realidad lo que tiene costos no es la oralidad en sí misma, sino el cumplimiento de las garantías básicas, el tratar de llevar a la práctica también la idea de que el proceso debe buscar la verdad y además redefinir el conflicto por otro de menor violencia, utilizando para ello una serie de principios que facilitan la idea de la justicia del caso concreto (inmediación, concentración, continuación, contradictorio, identidad física del juzgador).

Es necesario centrar los estudios de los costos económicos en la posibilidad efectiva de cumplir con las garantías constitucionales. Definitivamente tienen razón aquellos que han afirmado que la justicia tradicional, aquella que no se preocupa de minimizar el conflicto, de buscar la conciliación o de ofrecer una verdadera alternativa, es mucho más barata que un sistema procesal que pretenda llevar a la práctica los presupuestos para los cuales se instauró el sistema, como un marco de garantía.

El resultado podrá ser sorprendente. Al final es probable que el costo económico de un **sistema escrito** no tradicional, pero que pretenda cumplir con los objetivos de una justicia más humana, sencilla, y a la vez exalte los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución y las convenciones de Derechos Humanos (si es que ello

es posible por medio de la escritura), resulte bastante más caro que un **sistema oral también no tradicional**.

Esto tiene también relación con la trascendencia del sistema de administración de justicia en el seno del sistema político y social de un país. Acostumbrados a una "justicia barata", poco efectiva, sin complicaciones, aséptica, y a la vez a un "sistema judicial" burocrático, compuesto de funcionarios con poca incidencia en el acontecer social, alejados de los problemas básicos de los ciudadanos, es claro que tendrá algún costo económico tratar de invertir esa situación para hacer de la justicia penal un sistema más dinámico, de soluciones reales (o al menos mas acercadas a la realidad), con respeto de la dignidad del ser humano (Víctima y acusado), en la idea de transformar un conflicto, planteando alternativas de "solución" aceptables para la comunidad.

Desde esa óptica lo caro, lo costoso no es la oralidad en sí misma, sino la transformación del sistema judicial en un aparato al menos un poco más eficiente en toda su extensión.

b) Algunas previsiones para la celebración del juicio oral

Para celebrar adecuadamente el juicio oral se requieren de una serie de condiciones mínimas, sin las cuales el sistema de la oralidad puede fracasar.

Es cierto que la justicia se aproxima a una mejor solución al exigir la presencia de las personas relacionadas con el conflicto, desde el imputado hasta la víctima, incluyendo a los testigos, a los asesores legales, al Fiscal, a los Jueces que habrán de resolver.

Sin embargo, esa reunión requiere de una infraestructura mínima, a disposición del Tribunal. Se habla, en primer término, **de salas de juicio** diseñadas de manera especial, con los espacios necesarios para el Tribunal, las partes y sus abogados, el fiscal, así como el público.

En este sentido deben preferirse salas simples, lo más que el decoro judicial lo permita, en lugar de los "altares barrocos" que algunas veces hemos observado, para que los operadores del sistema y las personas relacionadas con el conflicto penal, encuentren un lugar

adecuado donde buscar aquella alternativa más humana, aceptable, posible.

Paralelamente somos del criterio que deben existir junto a la Sala de Juicio, una adecuada **"sala de testigos"**, donde se ubiquen a esperar a las personas que concurren al juicio por llamamiento del Tribunal, en la cual se encuentre algún funcionario auxiliar que pueda brindar alguna orientación mínima a los testigos y a todas las personas que concurren a la audiencia. Una Sala donde exista algún teléfono para que el testigo, con algún control, pueda comunicarse con el exterior, ya sea con el lugar donde trabaja o con su casa para justificar cualquier retraso; una Sala donde exista algún periódico del día; donde haya un baño, así como un poco de café, mientras el testigo espera a ser llamado a declarar. Estamos acostumbrados a tratar a los testigos de una manera bastante dura. Por lo general son personas que vienen al juicio porque los llaman, que en la mayoría de los casos no tienen ninguna intervención en el conflicto más que haberlo presenciado de alguna manera; que viene a brindarle una contribución a la comunidad al ayudar a reconstruir la forma en que ocurrió el hecho; que por lo general eso es suficiente para que a su vez entren en conflicto con el acusado o con la víctima, según sea su versión; personas a quienes ni siquiera recompensamos de alguna manera; que no vienen a pedir del estado un servicio, sino que acuden a contribuir a brindarlo; en fin son personas con sentimientos, inquietudes, deseos. Pensar en ellos también contribuye a humanizar el sistema judicial, muy plagado de rituales y formalismos sin sentido. Por otro lado, resultan indispensables también **las oficinas de citadores judiciales**, que se encarguen de convocar a todas las personas que deben concurrir el día y la hora señalados para el debate oral, los cuales deben disponer del equipo necesario para cumplir adecuadamente su labor. En Costa Rica se les asignó motocicleta para que recorran más rápido el circuito donde están asignados.

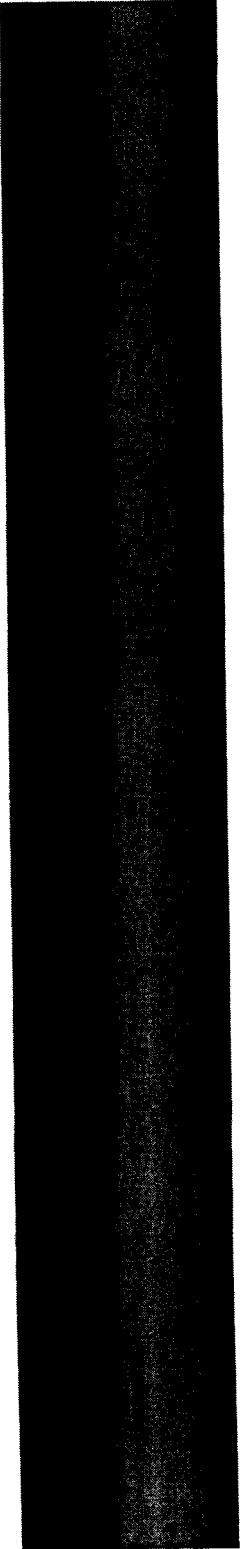
En ese mismo sentido deben mencionarse las **oficinas de policía**

judicial, dedicadas a la localización y presentación forzosa de **personas**, pues habrá muchas que deberán hacerlas comparecer ya sea en el curso de la audiencia o al menos unos pocos días después en caso de que se suspenda el debate, cuando su presencia resulta indispensable, sea por tratarse de alguno de los sujetos procesales, o bien porque su testimonio resultaba ser un elemento de prueba de carácter decisivo según el objeto del juicio, pero que no atendieron el llamado inicial del Tribunal, los cuales serán conducidos incluso por la fuerza si es necesario.

Paralelamente el Tribunal debe disponer de un **servicio de vigilancia y conducción de detenidos**, de manera que contribuyan con el Presidente en el ejercicio del poder de disciplina sobre quienes concurren a la audiencia y otros que se dedican a la custodia y traslado de detenidos. En algunos países, como el caso de Costa Rica, se han creado oficinas judiciales especializadas en el traslado y custodia de los detenidos para que concurren a cualquier llamado judicial, que se encargan de sacarlo del lugar donde guarda prisión, con orden escrita del Juez, para luego conducirlo bajo custodia hasta al Tribunal con el fin de que realice las actuaciones procesales necesarias (indagatoria inicial, actividad probatoria definitiva, audiencia oral, etc).

Otro aspecto que debe considerarse también, es el de mantener en el juicio algún sistema de grabación. La oralidad no debe ser sustituida por actas en las cuales se "asegure" la prueba, como tampoco las actas deben ser sustituidas por cintas magnetofónicas o de video, pues siempre estas formas hacen que se pierda una gran cantidad de detalles y de posibilidades, que sólo tendrán los que presenciaron el juicio.

Conservar una grabación al menos de la prueba oral que se reciba en el juicio, hasta que quede firme la sentencia, viene a llenar una importante necesidad para mejorar la calidad de la administración de justicia penal, pues la idea es que dicha grabación cumpla tres finalidades muy importantes:

- 
- a) Que la utilice el Tribunal en su deliberación, la tenga a mano para recordar cualquier aspecto de interés sobre el curso del debate, el dicho de los testigos y sobre los alegatos de las partes.
- b) Que después del dictado de la sentencia de instancia la grabación esté a disponibilidad de las partes, en el evento de que deseen escucharla para recordar aspectos de interés, con el fin de formular recursos de casación o revisión.
- c) Finalmente, para que dicha grabación se adjunte al expediente cuando se formula un recurso de casación, lo que permitirá al Tribunal de Casación Penal realizar un efectivo control sobre los Tribunales, respecto al contenido de la prueba oral, con el fin de apreciar si se cumplieron los presupuestos constitucionales de fundamentación y se respetaron las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba. De adquirirse ese equipo, debe aprobarse una mínima reglamentación sobre el uso de esas grabaciones, para que las conserve el Tribunal para los usos dichos, al menos hasta que la sentencia se encuentre firme, y dándole un uso restringido a la información, pues si los medios de comunicación desean conocer el desarrollo del debate deben estar presentes en la audiencia con las limitaciones que disponga el Presidente del Tribunal o el Juez.

Ese equipo vendría a colmar una necesidad muy sentida entre los distintos funcionarios, pues sirve a todos los operadores del sistema penal: a los Jueces de instancia, a la defensa (pública y privada), y a los Magistrados y Jueces de Casación. En el sistema oral siempre se escuchan alegaciones de las partes en el sentido de que los Tribunales no en todos los casos ajustan sus fallos al contenido de la prueba, de manera que se hace necesario efectuar un riguroso control en beneficio de la justicia.

c) Efectos nocivos de la suspensión de debates

La suspensión de debates por inasistencia de los acusados, defensores o testigos, constituye el "talón de Aquiles" del sistema oral. En este sentido deben realizarse todos los esfuerzos posibles para localizar a las personas que deben concurrir al llamamiento judicial,

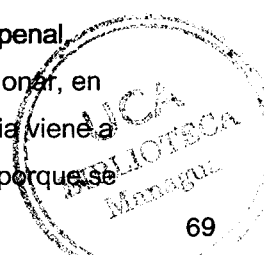
pues la oralidad exige esa presencia conjunta, todos a la vez, sin que puedan admitirse dilaciones.

El problema de la suspensión de debates en la materia penal afecta una gran cantidad de intereses. Por un lado se producen **afectaciones de índole patrimonial**. Dentro de esta categoría deben mencionarse, en primer término, los recursos estatales, pues cada vez que se suspende un juicio se desperdician recursos, sobre todo cuando no es posible reprogramar actividades laborales para los funcionarios públicos que debieron realizarlo: jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios, guardas de juicio, escribientes, etc. Aunque en muchas ocasiones ellos regresan a otras labores propias del cargo, lo cierto es que han esperado sin hacer nada durante algún tiempo hasta que se decide la suspensión del juicio, y en muchos otros casos no es posible reprogramar actividades laborales, principalmente cuando los Tribunales penales son dedicados con exclusividad a realizar juicios penales.

En segundo lugar, dentro de las afectaciones económicas, debemos mencionar que también se ocasionan perjuicios para los ciudadanos que si atendieron el llamado del Tribunal y se presentaron al juicio, dejando de lado sus ocupaciones habituales, lo que tiene un costo económico que sufren los testigos y demás sujetos procesales. Ellos comparecen y deben esperar algún tiempo en el Tribunal hasta que se les informa que el juicio se ha suspendido. A ese tiempo debe agregársele el que deberán utilizar después para comparecer de nuevo cuando se les vuelva a llamar. Son cargas económicas que por lo general no son retribuidas por las personas causantes de la suspensión del juicio.

Por otro lado, la suspensión de debates produce un grave **efecto nocivo sobre la calidad del servicio que presta la administración de justicia penal y sobre los ciudadanos que demandan justicia penal**.

En efecto, dentro de esta segunda categoría debemos mencionar, en primer término, que la eficacia de la Administración de Justicia viene a menos todas las veces que se suspende un debate, no sólo porque se



hace mucho más difícil de alcanzar el precepto constitucional de justicia pronta, sino además porque se impide que haya justicia del todo, es decir se impide "cumplir". Cuando el debate no es posible celebrarlo, se obstaculiza la decisión del Tribunal, lo cual no sólo retrasa la decisión sino que además se impide esa decisión. Sin debate no hay justicia penal. En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, la afectación se produce también sobre los ciudadanos. La suspensión de debates significa, ni más ni menos, mayor incertidumbre para el acusado, quien debe esperar aún más por la decisión del Tribunal; o bien, mayor impunidad en relación con la víctima y la sociedad, pues no habrá tampoco una sentencia que redefina el conflicto, ni establezca consecuencias socialmente más aceptables, como la reparación civil.

Estos dos grupos de afectaciones (patrimoniales y sustantivas) provocan en la ciudadanía un efecto multiplicador. Se pierde confianza en la Administración de Justicia por la poca posibilidad de ofrecer una solución al problema penal, al drama humano que está a la base de todo hecho delictivo, y se genera entonces un sentimiento de impotencia, tanto para los acusados como para las víctimas y demás ciudadanos. La respuesta tradicional a estas inquietudes es la de aumentar la represión: aumento del número de policías, aumento de penas, aumento de reos en prisión preventiva, disminución de substitutivos penales, etc.

Como puede apreciarse, el costo social y económico de la suspensión de debates es muy grande, y justifica realizar todos los esfuerzos posibles para disminuirla, pues como indicamos es el punto más débil de la oralidad.

d) El dictado inmediato de la sentencia

Otro de los aspectos que debe tenerse presente cuando se implementa la oralidad, lo constituye la necesidad de que el fallo sea emitido por el Tribunal inmediatamente después de la deliberación, y que la redacción final no demore más allá de 3 o 5 días, según el plazo máximo que la ley establezca, bajo pena de nulidad.

Este es uno de los aspectos que más preocupa a los juzgadores, acostumbrados a sobrepasar los plazos que la ley establece para el dictado de la sentencia. Sin embargo resulta de mayor conveniencia exigir que esos plazos sean cumplidos bajo pena de nulidad, de manera que si se superan debe repetirse el juicio, con la finalidad de que los juzgadores se acostumbren a cumplirlos, porque la práctica ha demostrado que si pueden hacerlo.

En efecto, en la experiencia costarricense, siguiendo al Código Procesal de Córdoba, se exige que la sentencia deba dictarse inmediatamente después de concluida la deliberación, y sólo en los casos complejos se autoriza para que la redacción final (y también la lectura integral que equivale a la notificación) pueda postergarse hasta por tres días hábiles.

Los jueces han logrado cumplir ese objetivo, pese a que entre una lectura integral de una sentencia y otra han realizado otros juicios, lo que algunos cuestionan.

La jurisprudencia de la casación penal costarricense ha tenido dos posiciones sucesivas en relación con esta exigencia. En una primera etapa el criterio fue muy rígido. Bastaba que el fallo no estuviere totalmente listo, pasado en limpio y con la firma de todos los jueces que integraron el Tribunal, para que fuera suficiente la nulidad tanto de la sentencia cuanto del debate. Unas horas de atraso bastaban para que aquel juicio oral debiera repetirse en forma integral.

En ese sentido la Sala de Casación Penal llegó a afirmar lo siguiente: "...en definitiva el a-quo confeccionó y firmó la sentencia documento fuera del término fijado por el artículo 396 párrafo primero en relación al 421 del Código de Procedimientos Penales, proceder que acarrea la nulidad tanto del debate mismo como del fallo de instancia, toda vez que implica una ruptura de los principios de inmediación de la prueba, concentración del juicio y su oralidad, normas de obligado acatamiento en el sistema procesal actual vigente. Se declara con lugar el reclamo y se anulan tanto la sentencia como el debate que la precedió, ordenándose el reenvío de este asunto a la oficina de origen para su

nueva sustanciación..."(48).

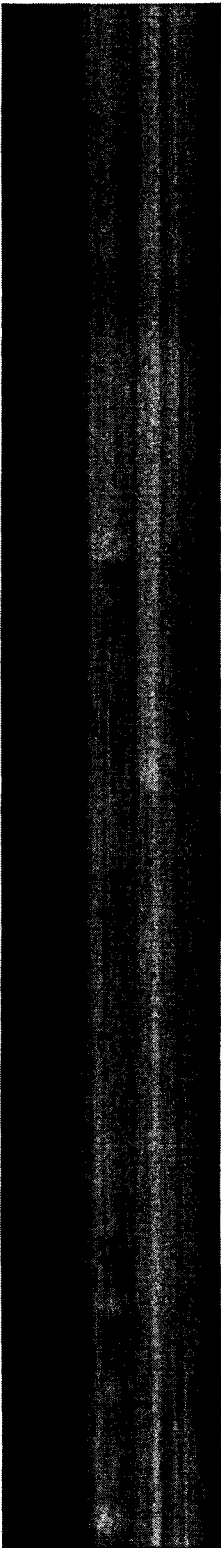
Esta posición de la casación penal hizo que los jueces debieran ajustar su conducta, modificando su actitud respecto del sistema procesal anterior. Para la gran mayoría de causas el tema fue pacífico, porque la sentencia podía ser redactada en esos plazos sin mayores problemas.

Sin embargo años después comenzaron a surgir problemas con algunos procesos de mayor complejidad y de más duración, en los cuales se había recibido gran cantidad de pruebas, debían examinarse muchos documentos, así como también debían resolverse una serie de aspectos jurídicos que dificultaban tener un fallo listo en un plazo perentorio e inflexible de tres días. Ello hizo que se recurriera a una serie de prácticas, para hacer realizable el dictado de la sentencia en forma adecuada. Una de esas prácticas consistió en solicitarle a las partes si estaban de acuerdo en que el Tribunal se tomara unos días más para dictar la sentencia, los cuales siempre se concretaban en el caso concreto, y por lo general no pasaban de 10 o 15 días, admitiendo una especie de consentimiento del vicio que impedía reclamarlo en casación.

Posteriormente, en una segunda etapa, los criterios en Casación no fueron tan rígidos. Ante la afluencia de nuevos casos de excesiva complejidad, y observando que en algunos de ellos no se afectaban los derechos de los sujetos del proceso cuando el Tribunal no tenía lista la sentencia en los plazos establecidos, siempre que se tratara de una situación totalmente excepcional, por la complejidad del asunto y además, que al final la sentencia hubiere estado disponible en un plazo razonablemente muy breve, la casación vino a señalar que si bien había un vicio procesal, no era de tal magnitud que justificara la nulidad de la sentencia. Para esos efectos afirmó la Sala Penal:

"...recientemente la Sala Constitucional dispuso (ver Voto N° 1502-92 de las catorce horas del diez de junio de este año) ante una aclaración que gestionó la Sala Tercera (de Casación Penal), que es posible subsanar algunas deficiencias relativas a la lectura de la sentencia

(que implica su notificación oral para los que hubieren intervenido en el debate). Lo anterior para que, por vía de excepción, se permita, mediante la notificación posterior, corregir el defecto que se comenta, lo cual debe ser apreciado en cada caso por la Sala Penal con fundamento en sus propias potestades" ya que no se estaría ante un problema de constitucionalidad sino de legalidad, en la medida en que establecidas genéricamente por esta Sala (la Constitucional) las reglas que interesan, se garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales de cada individuo" (lo que está entre paréntesis no es del texto original). Como puede observarse, la Sala Constitucional determinó, como tesis de principio, que siendo el problema aquí comentado -bajo las circunstancias que se expusieron- una cuestión de legalidad y no de constitucionalidad, es posible que la Sala Tercera (de Casación Penal) examine cada caso concreto, para que, de conformidad con su propio criterio, determine si es posible que se pueda subsanar el defecto, en la medida en que no se afecten los derechos fundamentales de los interesados. Tal planteamiento supone que solo por vía de excepción y bajo reglas de estricta rigurosidad puede admitirse -aunque "tolerarse" debería ser el término- el incumplimiento del acto procesal que aquí se discute. La regla genérica que con toda sapiencia contiene lo dispuesto por la Sala Constitucional, no puede extenderse más allá de lo racionalmente aceptable ni debe convertirse en una autorización "lato sensu" para que los jueces unipersonales evadan lo señalado por el artículo 421 de cita. Después de esa breve explicación, esta Sala estima que el presente es uno de esos casos excepcionales que se encuentra dentro de los parámetros analizados, por su especial complejidad, no solo por la extensión del fallo sino por la materia tan sensible de que trata (desobediencia precisamente a una resolución de la Sala Constitucional); que no se observa violación alguna al derecho de defensa en lo que se refiere a la notificación del fallo desde que, como se dice en la constancia antes indicada, aquél se encontraba "listo en borrador" a la hora dispuesta para su lectura (lo que implica que el



juez dictó sentencia inmediatamente después del debate) y el imputado fue puesto en conocimiento de lo resuelto, así como los demás interesados, teniendo oportunidad de ejercer su derecho de recurrir como ciertamente hizo. Dentro de tal panorama resulta incuestionable que se alcanzaron los efectos del acto que se discute y que de la situación aquí examinada -dadas sus especiales características- no derivaría más que una nulidad por la forma (nulidad por la nulidad misma, esto es, sin perjuicio o interés real) que no debe prevalecer en este particular asunto. Por todo lo anterior, los suscritos Magistrados concluimos en que debe denegarse el reclamo, no sin antes llamar la atención a los funcionarios involucrados para que cumplan las reglas de juicio anteriormente comentadas..." (Hay voto salvado del Magistrado Chaves)(49).

La Casación advirtió que si bien la práctica judicial había impuesto que la parte dispositiva de la sentencia debía dictarse el mismo día de clausurado el debate, lo cierto era que esa parte debía dictarse el mismo día que clausuraban la deliberación.

Para esos efectos debe diferenciarse el día que se clausura el debate, con el día que se clausura la deliberación. Así, utilizándose el argumento de la deliberación (que inicia después de la clausura del debate y se mantiene por todo el tiempo necesario, de manera ininterrumpida, salvo por razones fisiológicas y para descansar) el Tribunal podía atender el dictado de la sentencia de manera que cuando concluyera de deliberar tuviere una sentencia lista para ser leída a los comparecientes. Desde luego que prácticamente en casi todos los casos, con poquísimas excepciones, la deliberación se realiza en poco tiempo, por espacio de una o dos horas, de manera que más del 98% de los juicios la parte dispositiva del fallo se dicta el mismo día en que se clausura el debate, porque también ese mismo día inicia y concluye la deliberación, y la sentencia integral se tiene lista dentro de los tres días siguientes.

En tal sentido la Casación Penal afirmó que para la emisión de la sentencia de instancia importan cuatro momentos procesales: el

debate, que podría comprender una o más audiencias de uno o más días; **la deliberación**, igualmente podría extenderse varias sesiones de uno o varios días; **la lectura de la parte dispositiva del fallo** para aquellos casos en que se posterga la lectura integral, que debe realizarse el día en que termina la deliberación; y **la lectura integral del fallo**, para cuando no se leyó inmediatamente después de concluida la deliberación, la cual puede diferirse hasta por tres días, cuando ello es necesario por lo complejo del caso o lo avanzado de la hora, con el fin de redactar el fallo... En consecuencia, de acuerdo con esas disposiciones, la deliberación de los jueces para decidir el mérito debe iniciar apenas terminado el debate, y continuará durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias, de manera que puede extenderse -como se indicó- a una o varias audiencias de uno o varios días, sin que ello implique que se afecta la continuidad del acto. Ahora bien, en el evento de que la deliberación se prolongue varios días, éstos deben ser consecutivos y los juzgadores no pueden intervenir o resolver otros asuntos durante todo el tiempo que dure, porque la deliberación es continua, salvo cuando por alguna de las causas justificadas deba interrumpirse. Desde luego que la posibilidad de extender la deliberación durante varios días -como también ocurre con los debates- debe utilizarse sólo en aquellos **casos en** que lo justifique la complejidad del asunto a decidir, guardando una proporción razonable con esa complejidad, sin que pueda extenderse en forma arbitraria por el juzgador, para casos simples que pudieron ser resueltos el mismo día de concluido el debate. De lo anterior derivan las siguientes conclusiones: (i) la deliberación debe dar inicio inmediatamente después del cierre del debate; (ii) la duración está regulada en el párrafo final del artículo 392 que remite al 361, de manera que la deliberación puede prolongarse todas las sesiones consecutivas que sean necesarias; (iii) el plazo para concluir la deliberación debe guardar relación y proporcionalidad con la naturaleza del asunto a decidir; (iv) mientras dura la deliberación, los juzgadores no pueden intervenir en otros asuntos, salvo que ya haya

concluido ésta; y (v) la deliberación puede suspenderse hasta por un plazo de diez días y las causales son establecidas en el artículo 392, de modo que únicamente son la fuerza mayor y la enfermedad de alguno de los jueces..."(50).

Debe tomarse en cuenta que cuando se habla de una sentencia lista, se refiere a una sentencia pasada en limpio, debidamente firmada por los integrantes del Tribunal. Ya ocurrió que algunos jueces entendieran que podía tratarse de un borrador. En realidad hay que tomar en cuenta que las exigencias de la redacción pueden cumplirse en el tiempo que se brinda. Es perfectamente posible hacer una sentencia dentro de los plazos establecidos. Es probable que no se pueda hacer un trabajo extenso, excesivamente documentado con doctrina y jurisprudencia, pero si el suficiente para cumplir con los deberes exigidos por la Constitución y la ley respecto de la fundamentación: exposición de la acusación; una relación clara precisa y circunstanciada de los hechos probados; un resumen del contenido de la prueba oral; un análisis de todos los elementos de prueba esenciales incorporados al proceso; una adecuada justificación de todas las conclusiones fácticas del tribunal, indicándose el sustento probatorio de cada una de ellas; un análisis jurídico sobre cada uno de los aspectos básicos, en especial respecto de las normas aplicables, la calificación legal, la pena, las consecuencias civiles del hecho, etc.-

BIBLIOGRAFIA

ANTILLON MONTEALEGRE, Walter. Del proceso y la cultura. En Revista de Ciencias Jurídicas N° 63, mayo-agosto 1989. San José

BETTIOL, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal. Bosch, Barcelona, 1977.

BINDER, Alberto. Justicia penal y estado de derecho. Ad-hoc, Buenos Aires, 1993

BINDER, Alberto. Crisis y transformación de la justicia penal en latinoamérica, en "Reformas Procesales en América Latina. La oralidad en los procesos" Corporación de Promoción Universitaria, Chile, 1993.

Estudio de Casos

“Las piezas arqueológicas”

I. RESUMEN DE LA DENUNCIA

La denunciante, de nombre Mariíta Legítima, representante legal del centro de cultura de la República Pasolindo, señala que el día 8 de diciembre del año 2004, a las 1:00 p.m. recibió una llamada telefónica en donde su jefe le orientó que se dirigiera al aeropuerto de la República Pasolindo para aclarar y verificar un asunto relacionado con unas piezas arqueológicas que se habían encontrado. Al llegar al aeropuerto, la denunciante se encontró con un funcionario de la policía quien le detalló sobre el caso y ella observó que estaba una persona retenida en una de las oficinas del aeropuerto quien tenía dos maletas, procediendo el retenido a abrir las maletas, en las que se encontró dos portas vianda plástica que contenían piezas, presumiblemente arqueológicas. La persona retenida, de nombre Max Wilson, también portaba un bolso que abrió igualmente y contenía piezas, presumiblemente arqueológicas. El total de piezas era de seis. Las piezas, se presumían arqueológicas y originales. La denunciante advirtió que para verificar si eran piezas arqueológicas y originales se requería el criterio de un experto en la materia, en este caso un arqueólogo.

II. INFORMES DE LA POLICÍA NACIONAL Y OTROS

Acta de inspección ocular (8 de diciembre de 2004, a las 2:15 p.m.): El técnico de inspección de la policía observó un total de seis piezas presumiblemente arqueológicas. Estas fueron analizadas en el lugar por el arqueólogo Pánfilo quien determinó que tres piezas eran originales y que el resto ya habían sido restauradas. Posteriormente fueron trasladadas las piezas a la delegación respectiva de la policía.

Acta de detención (8 de diciembre de 2004, a las 2:00 p.m.): La policía detuvo a Max Wilson en el aeropuerto de la República Pasolindo por flagrante delito.

Avalúo de piezas (8 de diciembre de 2004, a las 4:00 p.m.): Pánfilo, especialista en la materia valoró las piezas en la suma de U\$ 10.000 (Diez Mil Dólares).

Dictamen sobre piezas (8 de diciembre de 2004, a las 4:00 p.m.):

Cinco de las seis piezas son de origen precolombino, y una pieza posiblemente sea réplica.

Estudio de Casos

“Las piezas arqueológicas”

Certificación del centro de cultura de la República Pasolindo (9 de diciembre de 2004): No existen registros ni inventarios en los archivos de los bienes arqueológicos cuyo poseedor es el señor detenido, de nombre Max Wilson

Recibo de ocupación (8 de diciembre de 2004, a las 2:00 p.m.): A Max Wilson se le ocuparon una maleta gris y otra negra conteniendo dos porta vianda, en las cuales habían seis piezas presumiblemente arqueológicas.

III. RESUMEN DE LAS DECLARACIONES

Testigo No. 1: Miguelito, miembro de la Policía de la República de Pasolindo

El día 8 de diciembre de 2004 estaba haciendo recorrido en la planta del área del aeropuerto y observó una actitud sospechosa del señor Max Wilson, posteriormente lo llamaron para comunicarle que había una persona cuyo equipaje había pasado por la máquina de rayos x unos objetos presumían ser vasijas, objeto que para la policía es prioridad revisar dado que es común echar en ellas drogas. Una vez que se revisó el equipaje se encontraron piezas que presumimos eran arqueológicas por lo mismo procedimos a detenerlo, formulando el acta de inspección ocular y el recibo de ocupación.

Testigo No. 2: Armandito, miembro de la Policía de la República de Pasolindo

Una vez que se realizó la detención se procedió inmediatamente a nombrarle un traductor, asimismo se le explicó los derechos que goza un detenido según la Constitución. Finalmente se procedió a brindarle la oportunidad para que realizara una llamada a su país.

Testigo No. 3: Mariña Legítima, Representante legal del centro de cultura de la República de Pasolindo

Señala que el El día 8 de diciembre de 2004 recibió una llamada telefónica en donde su jefe le orientó que se dirigiera al aeropuerto de la República de Pasolindo para aclarar y verificar un asunto relacionado con unas piezas arqueológicas que se habían encontrado. Al llegar al aeropuerto, la denunciante se encontró con un funcionario de la policía quien le detalló sobre el caso y ella observó que estaba una persona retenida en una de las oficinas del aeropuerto quien tenía dos maletas en las que se encontró dos portas vianda plástica que contenían piezas, presumiblemente arqueológicas. La persona retenida también portaba un bolso que igualmente contenía piezas, presumiblemente arqueológicas. El total de piezas era de seis. Las piezas, se presumían arqueológicas y originales. La denunciante advirtió que para verificar si eran

Estudio de Casos

“Las piezas arqueológicas”

piezas arqueológicas y originales se requería el criterio de un experto en la materia, en este caso un arqueólogo.

Testigo No. 4: Dexter Igualito, Especialista del departamento de arqueología del centro cultural de la República de Pasolindo

Las piezas arqueológicas encontradas son auténticas y corresponden, según su diseño, a la zona norte y sur de la República de Pasolindo

Testigo No. 5: Juan Verdad, Operador de Rayos x del aeropuerto

A la hora de pasar el equipaje del señor Max Wilson detecté que en el equipaje venían piezas de cerámicas, no sabían si eran arqueológicas y mi deber era darle aviso a la policía, como en efecto así lo hice.

PIEZAS ARQUEOLÓGICAS

ACUSACION

Quien suscribe, _____ en mi calidad de Fiscal Auxiliar de Managua y en representación Del Ministerio Público procedo a formular acusación y solicitud de apertura a juicio contra **MAX WILSON** por el delito **CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION** en perjuicio de **EL ESTADO DE NICARAGUA**, por los hechos que a continuación detallo:

I.-DATOS DE IDENTIFICACION DEL ACUSADO

MAX WILSON (Detenido), mayor, de 76 años. . .

II. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA VICTIMA. EL ESTADO DE NICARAGUA,

III.- RELACION DE LOS HECHOS:

1. El día miércoles ocho de diciembre del 2004, aproximadamente a las doce del medio día, en el lugar que sita, Aeropuerto Internacional de Managua, el acusado **MAX WILSON**, se disponía a salir hacia estados Unidos, por la Línea American Airline, en el vuelo 970, con destino a Miami.-.
2. Cuando el acusado llevó su equipaje a chequeo, al Área Internacional y las mismas pasaron por las máquinas de rayos X, un funcionario de nombre Daniel Isaac Manzanares, observó que dentro de dos maletas venían objetos en forma de hoyas, con un embalaje demasiado protegido, por lo que comunicó a la Policía Nacional , la que se hizo presente al lugar, así como funcionarios de Aduanas y del Instituto Nicaragüense de Cultura.-
3. Acto seguido, el acusado procedió a sacar de las maletas, unas piezas arqueológicas, determinándose a través de diagnóstico arqueológico, que el acusado exportaba ilícitamente, cinco piezas de cerámica y lítica, de las cuales tres de ellas son arqueológicas originales que están preservadas, otra pieza restaurada pero con valor arqueológico, una pieza de replica y un metate con su mano de piedra de moler original, las que corresponden a diferentes periodos cronológicos de la cultura nicaragüense que datan entre mil trescientos cincuenta a mil quinientos cincuenta años después de Cristo, antigüedad perteneciente al periodo de Ometepe, las cuales constituyen patrimonio cultural de nuestra nación y cuya exportación esta expresamente prohibida.
4. El acusado llevaba en sus maletas, sin autorización legal bienes culturales de nuestro país debidamente protegidos, consistentes propiamente en: **Pieza numero 1.** Un jarrón con base de pedestal, valorado en \$ 4,000.00. **Pieza numero 2.** Plato Trípode Policromado, valorado en \$ 3,000.00. **Pieza N° 3.** escudilla monocroma con base de pedestal, valorado en \$ 700.00. **Pieza N° 4.** Jarrón Policromado con base de pedestal valorado en \$ 4000.00, esta pieza esta restaurada. **Pieza N° 5.** Metate Trípode valorado en \$ 200.00 y una pieza con motivos zoomorfitos posible replica.
5. El acusado **MAX WILSON** no reportó inventario alguno de colecciones de bienes culturales arqueológicas, ni solicito registro alguno, tampoco realizo ninguna gestión para solicitar autorización a la Dirección de Patrimonio Cultural para exportar bienes culturales de ningún tipo o acto de compra venta de bienes culturales en ninguna parte del terriotio nacional.

PIEZAS ARQUEOLÓGICAS

6. El valor de los bienes culturales asciende a la cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS DOLARES (\$11.900.) o su equivalente en moneda nacional.

IV. CALIFICACION LEGAL PROVISIONAL:

Los hechos descritos constituyen el delito CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO. Decreto 1142, "Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación. Decreto 1237 a la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación. Arto. 38, 39 y 40.

PRUEBAS:

TESTIMONIALES:

- 1.-Marcio Alfredo García: Oficial de investigación en el área de drogas
- 2.-Néstor Canales: Investigador de la Policía Nacional.
- 3.-Tania Isabel García: Asesora legal del Instituto Nicaragüense de Cultura.
- 4.- Ramiro José García, Especialista del Instituto Nicaragüense de Cultura.
- 5.- Daniel Isaac Manzanares: Operador de rayos x del aeropuerto.
- 6.- Elvis Miranda: Oficial de la Policía Nacional.

DOCUMENTALES

Informes de la Policía Nacional.

Acta de inspección ocular realizada por Marcio Alfredo García.

Acta de detención y recibo de ocupación realizada por Néstor Canales.

Avaluó de piezas y Dictamen pericial realizado por Ramiro García.

Certificación del Instituto Nicaragüense de Cultura, firmado por Lic. Blanca Aráuz.

Fotocopia del pasaporte del acusado.

Fotocopia del ticket de avión a nombre del acusado.

PERITOS:

Ramiro García, Arqueólogo.

PRUEBAS MATERIALES

Las dos maletas, dos portaviandas y las seis piezas arqueológicas ocupadas.

SOLICITUD DE TRÁMITE

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.

10 de Diciembre del 2004.

PIEZAS ARQUEOLÓGICAS

INTERCAMBIO DE INFORMACION DE PRUEBAS PARA DEBATE

Quien suscribe, _____ en mi calidad de Fiscal Auxiliar de Managua y en representación Del Ministerio Público procedo de conformidad con los artículos 77 y 268 del CPP, artículo 4 y 10 de la L.O.M.P. a presentar escrito de Intercambio de información sobre prueba como lo indica el artículo 265 y 269 CPP.

I.- PRUEBAS TESTIMONIALES:

Testigo No. 1: Marcio Alfredo García, miembro de la Policía Nacional de la República de Nicaragua. Con quien demostraré que: El día 8 de diciembre de 2004 estaba haciendo recorrido en la planta del área del aeropuerto y lo llamaron para comunicarle que había una persona cuyo equipaje había pasado por la máquina de rayos x , y portaba unos objetos que se presumían ser vasijas, objeto que para la policía es prioridad revisar dado que es común echar en ellas drogas. Una vez que se revisó el equipaje se encontraron piezas que presumimos eran arqueológicas por lo mismo procedimos a detenerlo, formulando el acta de inspección ocular. El señor detenido se llama Max Wilson. Con el incorporaré él acta de inspección levantada en el lugar de los hechos .

Testigo No. 2: Néstor Canales Gaitán, miembro de la Policía de la República de Nicaragua. Con quien demostraré que: Una vez que se realizó la detención, se procedió inmediatamente a nombrarle un traductor, asimismo se le explicó los derechos que goza un detenido según la Constitución. Finalmente se procedió a brindarle la oportunidad para que realizara una llamada a su país. Realizó la detención del acusado y confeccionó el acta de ocupación de las evidencias materiales. Con el incorporaré él recibo de ocupación y el acta de detención.

Testigo No. 3: Tania Isabel García, Asesora legal del Instituto Nicaragüense de Cultura de la República de Nicaragua. Con quien demostraré que: El día 8 de diciembre de 2004 recibió una llamada telefónica en donde su jefe le orientó que se dirigiera al aeropuerto Internacional de de Managua para aclarar y verificar un asunto relacionado con unas piezas arqueológicas que se habían encontrado. Al llegar al aeropuerto, se encontró con un funcionario de la policía quien le detalló sobre el caso y ella observó que estaba una persona retenida en una de las oficinas del aeropuerto quien tenía dos maletas en las que se encontró dos portas vianda plástica que contenían piezas, presumiblemente arqueológicas. La persona retenida también portaba un bolso que igualmente contenía piezas, presumiblemente arqueológicas. Las piezas, se presumían arqueológicas y originales. La denunciante , procediendo el señor Wilson a abrirlas, encontrándose en una maleta color gris dos porta viandas plásticas las que contenían cada una una pieza presumiblemente arqueológica, en la otra maleta negra contenía dos porta viandas con una pieza cada una presumiblemente arqueológica y en el bolso de manos llevaba dos piezas presumiblemente arqueológicas., en total 6 piezas. advirtió que para verificar si eran

PIEZAS ARQUEOLÓGICAS

piezas arqueológicas y originales se requería el criterio de un experto en la materia, en este caso un arqueólogo.

Testigo No. 4: José García. Arqueólogo, Especialista del departamento de arqueología del Instituto Nicaragüense de Cultura. Con quien demostraré que:

El día 8 de diciembre del 2004, se presentó al aeropuerto Internacional de Managua, donde examinó las piezas, que eran 6. Cinco de ellas de cerámica y la otra de piedra. Cuatro de las piezas de cerámica son originales, una esta restaurada y la de piedra es una réplica. Las piezas arqueológicas encontradas son auténticas y corresponden, según su diseño, a la zona norte y sur de la República de Nicaragua.

Testigo No. 5: Daniel Isaac Manzanares, Operador de Rayos x del aeropuerto. Con quien demostraré que:

El día 8 de diciembre del 2004, a eso del mediodía, se encontraba en el aeropuerto, operando las máquinas de rayos X, y a la hora de pasar el equipaje del señor Max Wilson detectó que en el equipaje venían piezas de cerámicas, no sabían si eran arqueológicas y mi deber era darle aviso a la policía, como en efecto así lo hice.

6.- Elvis Miranda: Oficial de la Policía Nacional. Con quien demostraré que:

Que el día 8 de diciembre del 2004, a las doce y treinta del mediodía, fue informado por funcionarios de seguridad del Aeropuerto Internacional de Managua, que al acusado Max Wilson le habían detectado en su equipaje piezas arqueológicas y que las llevaba fuera del país. Llamó al equipo operativo del Distrito seis y a las autoridades del Instituto de Cultura Nicaragüense. Procedió a pedirle al acusado la documentación porque es prohibido sacar esas piezas y éste no llevaba ninguna autorización o documento para sacarlas. Con él incorporaré los actos de investigación realizados y el informe policial.

II. PRUEBAS DOCUMENTALES:

1.- Informe de la Policía Nacional, elaborado por el policía Miguel, donde se detallan las investigaciones realizadas.

2.- Acta de inspección ocular (8 de diciembre de 2004, a las 2:15 p.m.) realizada por Marcio Alfredo García: El técnico de inspección de la policía observó un total de seis piezas presumiblemente arqueológicas. Estas fueron analizadas en el lugar por el arqueólogo Ramiro José García quien determinó que tres piezas eran originales y que el resto ya habían sido restauradas. Posteriormente fueron trasladadas las piezas a la delegación respectiva de la policía. También incorporaré por su medio, 12 fotografías ilustrativas donde consta la forma en que el acusado llevaba las piezas arqueológicas.

PIEZAS ARQUEOLÓGICAS

3.- Acta de detención (8 de diciembre de 2004, a las 2:00 p.m.) realizada por Néstor Canales: La policía detuvo a Max Wilson en el aeropuerto Internacional de Managua por flagrante delito.

4.- Recibo de ocupación (8 de diciembre de 2004, a las 2:00 p.m.) realizado por Néstor Canales: A Max Wilson se le ocuparon una maleta gris y otra negra conteniendo dos portaviandas, así como un bolso de mano, en las cuales habían seis piezas presumiblemente arqueológicas.

5.- Avalúo de piezas (8 de diciembre de 2004, a las 4:00 p.m.) realizado por Ramiro José García: **Arqueólogo.** Especialista en la materia valoró las piezas en la suma de U\$ 10.000 (Diez Mil Dólares).

6.- Dictamen pericial de las piezas, realizado por Ramiro José García. (8 de diciembre de 2004, a las 4:00 p.m.): Cinco de las seis piezas son de origen precolombino, y una pieza posiblemente sea réplica.

7.- Certificación del Instituto Nicaragüense de Cultura, firmado por Lic. Blanca Aráuz. (9 de diciembre de 2004): No existen registros ni inventarios en los archivos de los bienes arqueológicos cuyo poseedor es el señor detenido, de nombre Max Wilson, ni solicitud para registrar esos bienes en el Instituto, ni autorización del señor Max Wilson para exportar bienes culturales, ni se registra compra-venta de los mismos, ni se ha autorizado para sacarlos del país.

8.- Fotocopia del pasaporte del acusado.

9.- Fotocopia del ticket de avión a nombre del acusado.

10.- Denuncia de Tania Isabel García, Representante del Instituto Nicaragüense de Cultura.

11.- Fototabla Ilustrativa, que consta de doce fotografías con las cuales demostraré la forma que estaban siendo transportados los bienes patrimonio de la nación por el acusado.

III.- PRUEBA PERICIAL:

1 RAMIRO JOSÉ GARCÍA. Perito Arqueólogo.

Dictamen pericial y avalúo de las piezas, realizado. (8 de diciembre de 2004, a las 4:00 p.m.): Con quien demostraré que las piezas arqueológicas examinadas son auténticas y corresponden, según su diseño a la zona norte y sur de la república de Nicaragua, excepto la de piedra que es una réplica.

Cinco de las seis piezas son de origen precolombino, y con quien demostraré que las piezas ocupadas fueron valoradas en la suma de \$ 11.900.00

PRUEBAS MATERIALES

1.- Una maleta negra conteniendo 2 porta viandas, las que tienen en su interior una pieza presumiblemente arqueológica cada vianda-

2.- Una maleta gris conteniendo 2 porta viandas, las que tienen en su interior dos piezas presumiblemente arqueológica cada vianda. En total se hacen dos maletas y 6 piezas arqueológicas.

PIEZAS ARQUEOLÒGICAS

3.- Un pasaporte del acusado.

4.- Un boleto de viaje número AA970-Q-08DEC1253p, a nombre del acusado.

IV.- PETICIONES:

Admitir los medios de prueba para el debate y citar a los testigos y peritos para el juicio y solicitar a la Policía Nacional remita las evidencias ofrecidas.

Managua,...

Fiscal

Normas Jurídicas de Nicaragua

Decretos - Ley
No. 1,142

LEY DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

Gaceta No. 282
02/12/82

LEY DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

Decreto No. 1,142 de 22 de noviembre de 1982

Publicado en La Gaceta No. 282 de 2 de diciembre de 1982

LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

en uso de sus facultades y con fundamento del Arto 18 del Decreto No. 388 del 2 de mayo de 1980,

Hace saber al pueblo nicaragüense:

UNICO:

Que aprueba la iniciativa presentada por el Consejo de Estado, del Decreto "Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación", que integra y literalmente dice:

El Consejo de Estado de la República de Nicaragua reunido en Sesión Ordinaria Número 11 del veintinueve de Septiembre de Mil Novecientos ochenta y Dos " Año de la Unidad de la Unidad Frente a la Agresión".

Considerando:

Que dentro de los lineamientos básicos del Programa de Gobierno figura en el Area de Cultura, la protección del Patrimonio Cultural de la Nación y que congruente con esta política, el Título III del Estatuto sobre Derechos y Garantías, Capítulo III Derechos Culturales establece que el Patrimonio Cultural debe ser protegido por el Estado por medio de Leyes para su conservación y evitar su fuga al extranjero:

POR TANTO:

en uso de sus facultades,

Decreta:

La siguiente:

LEY DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION Capítulo I.

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Para los efectos de esta Ley se consideran bienes culturales:

a) Paleontológicos: Todos los organismos fosilizados.

b) Arqueológicos: Todas las piezas, instrumentos, estructuras, restos o vestigios procedentes de culturas extinguidas.

c) Históricos: Los inmuebles o parte de ellos y los bienes muebles que estén directamente vinculados a la historia política, económica y social de Nicaragua.

d) Artísticos: Los bienes u objetos que, debido a su origen como producto de la actividad del hombre, constituyen verdaderos valores de las Bellas Artes o del Arte Nacional, ya sean estos plásticos, literarios, arquitectónicos, etc.

e) Conjuntos urbanos o rurales: Considerados de interés cultural, localizados en ciudades o campos de la República.

Artículo 2.- Los bienes culturales, existentes en el territorio nacional, contemplados en los incisos a) y b) del artículo anterior sea quien fuere su dueño o poseedor, forman parte por Ministerio de la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación y estarán bajo la salvaguarda y protección del Estado. En los casos de los incisos c), d) y e) se requerirá Declaración por escrito de la Dirección de Patrimonio para que se consideren parte del Patrimonio Cultural de la Nación; esta Declaración deberá comunicarse a quien corresponda.

Artículo 3.- Corresponde al Ministerio de Cultura, el mantenimiento y conservación de nuestro Patrimonio Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Artículo 4.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, el Ministerio de Cultura estará facultado para dictar los Reglamentos, Acuerdos y medidas necesarias para la protección del acervo cultural nicaragüense.

Artículo 5.- Cuando en las restantes disposiciones de este Decreto se haga referencia a la "Dirección de Patrimonio", se entenderá que se hace mención a la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Artículo 6.- Corresponderá a la Dirección de Patrimonio, la dirección científico-metodológica de los museos del país.

Capítulo II.

De la Conservación del Patrimonio Cultural

Artículo 7.- Para efecto de esta Ley se considera prioritaria la conservación de todos aquellos bienes culturales de reconocido valor histórico, para el proceso de liberación del pueblo nicaragüense.

Artículo 8.- Los propietarios o arrendatarios de viviendas, o conjuntos urbanos o rurales que tengan significación histórica o arquitectónica para poder realizar cualquier construcción o remodelación en los mismos, además de las exigencias técnicas requeridas, necesitarán previamente autorización de la Dirección de Patrimonio.

Artículo 9.- Cuando un organismo estatal o una persona natural o jurídica, nacional o extranjero, desarrollen proyectos de cualquier índole, en inmuebles, conjuntos urbanos o rurales y zonas arqueológicas o paleontológicas que estén comprendidas en esta Ley, deberán destinar el porcentaje que señale la Dirección de Patrimonio, que oscilará entre el 1 y el 10% del presupuesto total de las obras a realizarse, para el rescate, conservación o restauración, según el caso, de los bienes del Patrimonio Cultural que fueren afectados por la ejecución de las obras, depositando ese porcentaje a nombre del Fisco.

Artículo 10.- Las modificaciones a efectuarse en bienes sujetos al régimen de esta Ley, estarán reguladas por las disposiciones que se establezcan en los Reglamentos de este Decreto.

Artículo 11.- El que encontrare o tuviere conocimiento de la existencia de bienes a que se refieren los incisos a) y b) del Artículo 1 de esta Ley, deberá dar aviso dentro del término de 24 horas, mas el de la distancia, a la Junta Municipal mas cercana, la que expedirá la constancia oficial del aviso e informará dentro del mismo plazo señalado anteriormente a la Dirección de Patrimonio.

Artículo 12.- Los propietarios o poseedores de bienes culturales quedan obligados a entregar, previo inventario, a la Dirección de Patrimonio dichos objetos, cuando ésta lo solicite para los efectos de exhibirlos temporalmente al público dentro o fuera del país.

Artículo 13.- En caso de que los bienes a que se refiere el Arto anterior, sufrieren daños, se destruyeren o perdieren, la Dirección de Patrimonio pagará al dueño en concepto de

indemnización el monto de la póliza de seguro que al efecto deberá tomarse.

Artículo 14.-Cuando la Dirección de Patrimonio tuviere conocimiento que bienes bajo el régimen de esta Ley, se encuentran fuera de Nicaragua, el Ministerio de Cultura podrá solicitar por escrito al Ministerio del Exterior sus buenos oficios para la recuperación de los mismos.

Artículo 15.-Los bienes a que se refiere esta Ley podrán ser objeto de:

a) Expropiación por causa de Utilidad Pública.

b) Ocupación o aseguramiento temporal.

Artículo 16.-Serán causa de Utilidad Pública para proceder a la expropiación, las siguientes:

a) La necesidad de efectuar técnicamente excavaciones o remociones de materiales en los sitios en que se suponga fundamentalmente la existencia de construcciones o restos arqueológicos, paleontológicos o antropológicos.

b) La necesidad de preservar los bienes sujetos al régimen de esta Ley, si su propietario se negare o no pudiere hacerlo.

c) La necesidad de impedir la ejecución de cualquier obra que demerite el bien.

d) La necesidad de suspender la ejecución de una obra o de suprimir una ya realizada que impida la adecuada apreciación de un bien arqueológico, histórico o artístico, que vaya en contra de sus características propias.

e) La necesidad de recuperar bienes que a juicio de la Dirección de Patrimonio, tengan un valor cultural especial.

Artículo 17.-Cuando la Dirección de Patrimonio considera que bienes sujetos al régimen de esta Ley, necesitan ser asegurados provisionalmente, ésta tendrá la facultad de proceder a su ocupación o aseguramiento temporal. Finalizada la causa que motivó su ocupación, dichos bienes serán devueltos en el mas breve plazo a su legítimo dueño o poseedor.

Artículo 18.-En el caso de que un propietario o poseedor de un bien sujeto al régimen de esta Ley, se decida a realizar con el mismo transacción de venta, el Estado tendrá opción preferencial para adquirirlo.

Artículo 19.-Los poseedores y propietarios, sean estas personas naturales o jurídicas, que posean bienes culturales objeto de esta Ley son responsables de su guarda y conservación.

Capítulo III.

Registro

Artículo 20.-Se crea el Registro de Patrimonio Cultural, como una institución de carácter público, adscrito al Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio.

Artículo 21.-Los poseedores y propietarios, sean estas personas naturales o jurídicas, quedan obligados a inscribir en el Registro antes mencionado, los bienes culturales que sean de su propiedad o los tengan en posesión, así como los traspos de dominio, posesión o lugar que efectúen a favor de otras personas naturales o jurídicas.

Artículo 22.-Las misiones diplomáticas, consulares y las oficinas de organismos internacionales, que poseyeran bienes a que se refieren el Arto 1° en sus incisos a) al d) de este Decreto, deberán inscribirlos en el Registro de Patrimonio Cultural.

Artículo 23.-Para el cumplimiento de lo ordenado en los Artículos anteriores, se concede un

plazo de un año a partir de la promulgación de la Ley y su Reglamento.

En caso de incumplimiento se tendrá como ilícita la tenencia y se procederá al decomiso de los bienes, los que pasarán a ser propiedad del pueblo nicaragüense y serán administrados por el Ministro de Cultura.

Capítulo IV.

Exportación

Artículo 24.-Se prohíbe la exportación definitiva de bienes que forme parte del Patrimonio Cultural, salvo canjes de Gobierno o Instituciones científicas y extranjeras, por acuerdo del Gobierno de la República y lo estipulado en el Arto siguiente.

Artículo 25.-Podrá autorizarse la exportación definitiva de los bienes que formen parte del Patrimonio Cultural, cuando existan en el país varios ejemplares iguales o similares, necesarios para su conocimiento y consulta.

Artículo 26.-Para los efectos de autorizar la exportación definitiva a que se refieren los Artículos que anteceden, la Dirección de Patrimonio nombrará una Comisión Técnica.

Artículo 27.-Los bienes culturales extranjeros que se importen ilícitamente a territorio nicaragüense, serán devueltos por Nicaragua al país de origen, previa solicitud del Gobierno interesado y resolución del Gobierno de Nicaragua de conformidad con los Convenios y normas internacionales.

Capítulo V.

Vigilancia

Artículo 28.-La Dirección de Patrimonio, nombrará inspectores profesionales y también voluntarios de los organismos de masas que se encargarán de vigilar el cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos.

Artículo 29.-Los Coordinadores de las Juntas Municipales también velarán por el correcto cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos.

Artículo 30.-Los funcionarios y empleados de Aduana, encargados de controlar las exportaciones que se hagan por cualquier vía, suspenderán la tramitación de las solicitudes de embarque cuando tengan conocimiento o presunción grave que se trata de exportación ilícita de algunos de los bienes a que se refiere esta Ley, retendrán el bien y consultarán obligatoriamente a la Dirección del Patrimonio.

Una vez finalizado el procedimiento aduanero y comprobada la exportación ilícita, se ordenará el decomiso de los bienes, los que pasarán a ser propiedad del pueblo nicaragüense, administrados por el Ministerio de Cultura.

Capítulo VI.

Prohibiciones

Artículo 31.-No podrán destruirse o alterarse parcial o totalmente los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

Artículo 32.-Se prohíbe la realización de trabajos materiales de exportación por excavación, remoción o por cualquier otro medio en zonas arqueológicas o paleontológicas, aún cuando se efectuare en terrenos de propiedad privada. Únicamente serán realizados por la Dirección de Patrimonio o con su autorización.

Artículo 33.-Se prohíbe retirar o remover de su sitio original, sin previa autorización de la Dirección de Patrimonio, los bienes muebles incorporados o que formen parte de un inmueble perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación.

Artículo 34.-Si se contraviene la anterior disposición la Dirección de Patrimonio exigirá al infractor la reinstalación del bien mueble, procurando hacerlo en el sitio original; si éste no la realiza, aquélla la hará directamente, previo secuestro del bien, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que haya lugar por los daños al bien respectivo.

Artículo 35.-Se prohíben los actos traslativos de dominio, principios de enajenación o de mera posesión que se realicen a cualquier título sobre los bienes que formen parte del Patrimonio Cultural, sin que hayan tenido previamente autorización de la Dirección de Patrimonio.

Artículo 36.-Cuando la Dirección de Patrimonio tuviere conocimiento que cualquier bien mueble o inmueble sujeto al régimen de esta Ley, estuviere en peligro de ser destruido, dañado o transformado por actos de Instituciones del Estado o de particulares, ordenará la inmediata suspensión del acto.

Artículo 37.-Las obras que se ejecuten violando la autorización otorgada serán suspendidas de inmediato por la Dirección de Patrimonio, y en su caso se procederá a la restauración por el responsable de acuerdo a los requisitos exigidos por la Dirección de Patrimonio. Las obras de restauración o conservación del bien serán por cuenta del infractor.

Capítulo VII.

Disposiciones Penales

Artículo 38.-Constituye delito contra el Patrimonio Cultural de la Nación, toda acción u omisión mediante actos o hechos que violen las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 39.-Los delitos a que se refiere el Artículo 38 serán sancionados de la manera siguiente:

1) Los autores con arresto de (6) seis meses a (2) dos años.

2) Los cómplices con arresto de (6) seis meses a (2) dos años.

3) Los encubridores con arresto de (6) seis meses a (2) dos años.

Estas penas son inmutables y serán impuestas por el Juez Instructor de Policía que tendrá dicha facultad.

Además de las penas anteriores sufrirán multas a favor del Fisco cuyo valor será de (C\$1,000.00) Un Mil Córdobas a (C\$50,000.00) Cincuenta Mil Córdobas.

Artículo 40.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el Arto anterior, las penas para los autores y demás partícipes de los hechos punibles de que aquí se trata, llevan como accesorios el decomiso de los bienes e instrumentos utilizados para el hecho, los que serán destinados al Ministerio de Cultura.

Artículo 41.-Constituirá agravante de la responsabilidad criminal, además de las contempladas en el Código Penal, el que los infractores fueren:

a) Funcionarios o empleados del Ministerio de Cultura.

b) Funcionarios o empleados de las Juntas Municipales.

Artículo 42.-Cuando el hecho fuere cometido por un directivo, socio o empleado de una persona jurídica en beneficio de ésta, la persona jurídica responderá por las multas y responsabilidades civiles en que hubieren incurrido estos.

Artículo 43.-Los funcionarios de la Dirección de Patrimonio que como tales, tuvieran conocimiento de la comisión de este delito y no lo denunciaren, serán sancionados como autores de los mismos.

Artículo 44.-Serán competentes para conocer del delito contemplado en el Arto 38 de esta Ley,
los Tribunales Comunes.

Artículo 45.-Las disposiciones de esta Ley relativas a la exportación e importación de los bienes sujetos al régimen de la misma, forman parte también de la legislación aduanera, en especial para los efectos del Artículo 1° y 2 del Decreto 942, Ley sobre Defraudación y Contrabando Aduanero.

Artículo 46.-Los infractores a los Artículos 31 al 37 de esta Ley, incurrirán en una multa administrativa, impuesta por la Dirección de, Patrimonio a favor del Fisco, entre Doscientos y Veinte Mil Córdoba.

Artículo 47.-La graduación de las multas a que se refiere el Arto anterior, se determinará considerando el valor de los bienes, la educación, las condiciones económicas y los motivos y circunstancias que impulsaron al infractor para la comisión del hecho.

Artículo 48.-A los reincidentes en las infracciones del capítulo anterior, se les impondrá una multa equivalente a la contemplada en el Arto 46 mas los dos tercios de la misma.

Artículo 49.-Las resoluciones que impongan las multas a que se refieren los Artos. 46, 47 y 48 de esta Ley, podrán ser impugnadas mediante el Recurso de Revisión, interpuesto ante el Ministerio de Cultura en los términos establecidos en los Reglamentos de esta Ley.

Capítulo VIII.

Disposiciones Finales.

Artículo 50.-Se deroga el Decreto No. 101, publicado en "La Gaceta" del 26 de septiembre de 1979, y todas las disposiciones dictadas en Leyes anteriores que se opongan a este Decreto.

Artículo 51.-El presente Decreto entrará en vigencia, desde el momento de su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en la ciudad de Managua, a los veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y dos. "Año de la Unidad Frente a la Agresión".

(f) Comandante de la Revolución **Carlos Núñez Téllez**, Presidente del Consejo de Estado. - Sub-Comandante **Rafael Solís Cerda**, Secretario del Consejo de Estado.

Dado en la ciudad de Managua, a los veintidós días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. "Año de la Unidad Frente a la Agresión".

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. **Sergio Ramírez Mercado**. - **Daniel Ortega Saavedra**. - **Rafael Córdova Rivas**.

Normas Jurídicas de Nicaragua

Decretos - Ley
No. 1237

REFORMAS A "LEY DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION"

Gaceta No. 88
19/04/83

REFORMAS A "LEY DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION"

Decreto No. 1237 de 12 de abril de 1983

Publicado en La Gaceta No.88 de 19 abril de 1983

LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades,

Decreta:

La siguiente:

REFORMA AL DECRETO No. 1142 «LEY DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION»

Artículo 1.-Refórmase el Arto 35 de dicho Decreto, el que se leerá así:

«Arto 35. -Se prohíben los actos traslativos de dominio, principios de enajenación o de mera posesión que se realicen a cualquier título sobre los bienes que formen parte del Patrimonio Cultural, sin previa autorización de la Dirección de Patrimonio. La falta de dicha autorización conllevará la nulidad del acto».

Artículo 2.-Refórmase el Capítulo VII del mismo Decreto el que se leerá así:

Capítulo VII Disposiciones Penales

Arto 38. -Constituyen delito contra el Patrimonio Cultural de la Nación, las acciones u omisiones que destruyan o dañen en forma irreversible los bienes a que se refiere esta Ley.

Arto 39.-El delito a que se refiere el artículo precedente, será sancionado con:

a) Prisión de 1 a 4 años.

b) Multa de Un Mil a Cincuenta Mil Córdobas, a favor del Fisco, sin perjuicio de la indemnización que corresponda al propietario o poseedor por el daño causado.

Arto 40.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, las Penas para los autores y demás partícipes de los hechos punibles de que aquí se trata, llevan como accesorios el decomiso de los bienes e instrumentos utilizados para el hecho, los que serán destinados al Ministerio de Cultura.

Arto 41.-Constituirá agravante de la responsabilidad criminal, además de las contempladas en el Código Penal, el que los infractores fueren:

a) Funcionarios o empleados del Ministerio de Cultura;

b) Funcionarios o empleados de las Juntas Municipales.

Arto 42. -Cuando el hecho fuera cometido por un directivo, socio o empleado de una persona jurídica en beneficio de ésta, la persona jurídica responderá solidariamente con éstos, por las multas y responsabilidades civiles en que hubieren incurrido.

Arto 43.-Los funcionarios de la Dirección de Patrimonio que como tales, tuvieren conocimiento

de la comisión de este delito y no lo denunciaren, serán sancionados como autores de los mismos.

Arto 44.-Serán competentes para conocer del delito contemplado en el Artículo, 38. de esta Ley, los Tribunales Comunes.

Arto 45.-Las disposiciones de esta Ley relativas a la exportación e importación de los bienes sujetos al régimen de la misma, forman parte también de la legislación aduanera, en especial, para los efectos del artículo 2o. del decreto No. 942, Ley sobre Defraudación y Contrabando Aduanero.

Arto 46.-A los infractores de esta Ley, si el hecho no constituyese delito, se les impondrá una multa administrativa por la Dirección de Patrimonio a favor del Fisco, cuyo monto será de Doscientos a Veinte Mil Córdobas.

Arto 47.-La graduación de las multas a que se refiere el Arto anterior, se determinará considerando el valor de los bienes, la educación, las condiciones económicas y los motivos y circunstancias que impulsaron al infractor para la comisión del hecho.

Artículo 48. -A los reincidentes en el caso del Artículo 46. de esta Ley, se les sancionará con una multa equivalente a la que les fue impuesta, aumentada en dos tercios.

Arto 49.-Las resoluciones emitidas por la Dirección de Patrimonio podrán ser objeto de revisión ante el Ministro de Cultura, en los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley».

Artículo 3.-El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en «La Gaceta», Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los doce días del mes de abril de mil novecientos ochenta y tres. «Año de Lucha por la Paz y la Soberanía».

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL.- Daniel Ortega Saavedra.- Sergio Ramírez Mercad.- Rafael Córdova Rivas.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

1.

1.

NOTAS

Lined area for notes, consisting of 20 horizontal lines.

12 AÑOS ESPECIALIZANDO A LOS PROFESIONALES DEL PAÍS

Los 12 años de existencia de los postgrados y maestrías han convertido a la UCA en pionera de los estudios de tercer nivel.

El postgrado ha tenido como objetivo responder a las necesidades del país y de la región brindando una oferta pertinente, flexible y dinámica que logre fortalecer el compromiso social del proyecto UCA, con sostenibilidad económica. A través de sus programas de postgrado, la UCA desarrolla en los estudiantes conocimientos, habilidades y una actitud crítica con sensibilidad social.

La oferta educativa en estos 12 años ha sido amplia y con una diversidad de conocimientos y saberes ubicados en 18 áreas disciplinares de la Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Gerencia de Servicios Públicos Agropecuarios, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, Derecho de Empresa, Historia, Psicología Industrial, Ciencias Sociales, Perspectivas de Género y Desarrollo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Servicios Sociales Básicos, Violencia y Salud Mental, Gerencia de Agronegocios,

Literatura, Desarrollo Rural y Desarrollo Local y Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de niños, niñas y adolescentes. Además de las maestrías la UCA cuenta con un Doctorado en Dirección y Administración de Organizaciones y pretende en el futuro, ampliar la oferta de doctorados y cursos de especialización.

Contamos con la colaboración académica de Universidades de la talla de ESADE, ETEA, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Barcelona, Texas A&M University, Universidad Iberoamericana de México, entre otras. Más del 40% de los profesores del postgrado provienen de estas Universidades.

Entre 1999 y abril del 2005, la Universidad ha beneficiado a 7,035 profesionales interesados en su actualización académica. La UCA ha graduado a un total de 551 profesionales a nivel de maestría. Del total de estudiantes que ingresan a los programas de maestrías un 60% son mujeres y un 40% hombres, el 80% proviene de instituciones privadas y un 44% proviene de Managua; un 26% son graduados de la UCA y un 57% de otras universidades del país.

De cara a la futura acreditación de nuestros programas de postgrado, en el año 2005 se realiza el proceso de autoevaluación de los programas de Maestrías.



2012101808